



BOLETIM OFICIAL

SUMÁRIO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA:

Decreto-Presidencial n° 3/2008:

Que exonera Membros do Governo dos cargos que indica.

ASSEMBLEIA NACIONAL:

Resolução n° 67/VII/2008:

Elege três cidadãos para o Conselho Superior de Magistratura Judicial.

Resolução n° 68/VII/2008:

Aprova, para ratificação, o Acordo sobre a transferência de pessoas condenadas entre a República de Cabo Verde e o Reino de Espanha.

Resolução n° 69/VII/2008:

Aprova, para ratificação, o Acordo sobre a extradição entre a República de Cabo Verde e o Reino de Espanha.

Resolução n° 70/VII/2008:

Aprova, para ratificação, o Acordo de auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre a República de Cabo Verde e o Reino de Espanha.

Resolução n° 54/VII/2008:

Deferir o pedido de prorrogação da suspensão temporária de mandato do Deputado Alcindo Francisco Rocha.

Rectificações:

Às Leis n° 23/VII/2008 e 24/VII/2008, publicados no *Boletim Oficial* n° 9, de 3 de Março de 2008.

CONSELHO DE MINISTROS:

Resolução n° 16/2008:

Aprova o Plano Estratégico de Luta Contra as Doenças Não transmissíveis (DNT).

Resolução n° 17/2008:

Atribui ao Sr. Frederico Pereira Almeida, residente em Achada de Santo António, Cidade da Praia, ilha de Santiago, a concessão de uma parcela de terreno do domínio público marítimo situada na localidade contígua ao porto de Gouveia, no Concelho da Ribeira Grande de Santiago, para a construção de um complexo turístico.

Resolução n° 18/2008:

Dispensa o concurso público para as obras de reabilitação, remodelação das instalações hidrosanitárias, substituição das redes de água quente e fria do Hospital Baptista de Sousa em São Vicente.

Resolução n° 19/2008:

Dispensa o concurso público para as obras de reabilitação, reconstrução e remodelação do Edifício da ex-sede da EMPA sito na Achada Grande Frente, cidade da Praia, onde ficarão as instalações dos serviços da Direcção Central da Polícia Judiciária de Cabo Verde.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto-Presidencial nº 3/2008

de 14 de Abril

Usando da competência conferida pela alínea *d*) do nº 2 do artigo 134º da Constituição, o Presidente da República decreta o seguinte:

Artigo 1º

São exonerados, a seu pedido, sob proposta do Primeiro-Ministro, dos cargos abaixo indicados, os seguintes cidadãos:

- Dr. Américo Sabino Soares Nascimento, de Secretário de Estado da Juventude e Desportos; e
- Dra. Leonesa Lima Fortes, de Secretária de Estado Adjunta da Ministra das Finanças e Administração Pública.

Artigo 2º

O presente Decreto-Presidencial entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Palácio da Presidência da República, na Praia, aos 4 de Abril de 2008. – O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES

Referendado aos 4 de Abril de 2008.

O Primeiro-Ministro, *José Maria Pereira Neves*

—o—

ASSEMBLEIA NACIONAL

Resolução nº 67/VII/2008

de 14 de Abril

A Assembleia Nacional vota, nos termos da alínea *n*) do artigo 174º da Constituição, a seguinte Resolução:

Artigo Único

São eleitos os Cidadãos Fátima José Sapinho Gomes Monteiro, Ermitão Carvalhinho Fidalgo Spínola Barros e Daniel Lopes Pereira de Barros para, nos termos da alínea *c*) do nº 3 do artigo 221º da Constituição da República, integrarem o Conselho Superior da Magistratura Judicial.

Aprovada em 25 Março de 2008.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, *Aristides Raimundo Lima*

Resolução nº 68/VII/2008

de 14 de Abril

A Assembleia Nacional vota, nos termos da alínea *b*) do artigo 178º da Constituição, a seguinte Resolução:

Artigo 1º

É aprovado, para ratificação, o Acordo sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre a República de Cabo Verde e o Reino de Espanha, assinado em Madrid no dia 20 de Março de 2007, cujos textos autênticos em português e espanhol fazem parte integrante da presente Resolução.

Artigo 2º

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e o Acordo referido no artigo anterior produz efeitos em conformidade com o que nele se estipula.

Aprovada em 25 de Março de 2008.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, *Aristides Raimundo Lima*

**CONVENIO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS
ENTRE LA REPÚBLICA DE CABO VERDE
Y EL REINO DE ESPAÑA**

La República de Cabo Verde y el Reino de España, denominadas en lo sucesivo “las Partes”.

Deseando profundizar las relaciones jurídicas entre ambos Estados y facilitar su cooperación en el ámbito judicial, así como favorecer la reinserción social de las personas que hubieran sido objeto de condena en cualquiera de los dos países, han convenido concluir este Convenio sobre ejecución recíproca de resoluciones judiciales en materia penal, a tal efecto:

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Definiciones

A los efectos del presente Convenio, la expresión:

- a) “Estado de condena” designa el Estado donde se ha condenado a la persona que puede ser trasladada o que ya lo haya sido;
- b) “Estado de cumplimiento” designa al Estado al que el condenado puede ser trasladado o ya lo ha sido, con el fin de cumplir su condena;
- c) “Sentencia” designa una resolución judicial firme en la que se pronuncia una condena o medida de seguridad privativa de libertad;
- d) “Condenado” designa a la persona que está cumpliendo una pena o medida de seguridad privativa de libertad que le ha sido impuesta por sentencia firme en el Estado de condena.

Artículo 2

Principios generales

1. Las Partes se comprometen a prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en materia de traslado de personas condenadas en las condiciones previstas por el presente Convenio.

2. Las penas o medidas de seguridad impuestas en España a nacionales de Cabo Verde podrán ser cumplidas en Cabo Verde en establecimientos penales o bajo la supervisión de autoridades de Cabo Verde de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

3. Las penas o medidas de seguridad impuestas en Cabo Verde a nacionales de España podrán ser cumplidas en España en establecimientos penales o bajo la supervisión de autoridades españolas, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

4. El traslado podrá solicitarse bien por el Estado de condena bien por el Estado de cumplimiento.

Artículo 3

Condiciones del traslado

1. Un traslado podrá llevarse a cabo con arreglo al presente Convenio solamente en las condiciones siguientes:

- a) El condenado deberá ser nacional del Estado de cumplimiento;
- b) La sentencia deberá ser firme;
- c) La duración de la pena o medida de seguridad pendiente de cumplimiento por el condenado deberá ser al menos de 1 año, el día de la recepción de la petición.
- d) El condenado, o su representante legal, en caso de incapacidad del condenado, deberá consentir expresamente el traslado;
- e) Los hechos por los cuales la persona fue condenada deben constituir delito con arreglo a la ley del Estado de cumplimiento, aunque no exista identidad en la tipificación;
- f) El Estado de condena y el Estado de cumplimiento deberán estar de acuerdo en el traslado.

2. En casos excepcionales, las partes podrán convenir en un traslado, aunque la duración de la condena que reste por cumplir sea inferior a la prevista en el apartado 1, c).

3. Las partes podrán acordar la aplicación de las disposiciones del presente Convenio a las penas y medidas de seguridad impuestas contra menores de edad, de conformidad con su legislación respectiva. En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento de la persona que se encuentre legalmente facultada para actuar en nombre del menor.

Artículo 4

Deber de facilitar información

1. El Estado de condena informará al condenado que pueda beneficiarse del presente Convenio de la existencia y contenido del mismo.

2. Si el condenado expresa al Estado de condena su deseo de ser trasladado en virtud del presente Convenio, dicho Estado deberá cursar la solicitud al Estado de cumplimiento a la mayor brevedad posible, comunicando la información contenida en el apartado 4.

3. Si el condenado expresa al Estado de cumplimiento su deseo de ser trasladado en virtud del presente Convenio, el Estado de condena deberá proporcionar al Estado de cumplimiento, a petición de éste la información siguiente:

4. Las informaciones comprenderán:

- a) El nombre, la fecha y el lugar exacto de nacimiento del condenado, así como el nombre de sus padres;
- b) Una exposición de los hechos que hayan originado la condena;
- c) La naturaleza, la duración y la fecha de comienzo y de terminación de la pena o medida de seguridad.

5. Deberá informarse por escrito al condenado del curso dado a su solicitud en aplicación de los párrafos precedentes, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados con respecto a una petición de traslado.

Artículo 5

Autoridades centrales

1. Cada Parte designará una autoridad central encargada de enviar y recibir directamente las solicitudes de traslado con arreglo al presente Convenio.

2. La autoridad central de España será el Ministerio de Justicia. La autoridad central de Cabo Verde será el Ministerio de Justicia. Las Partes podrán modificar la designación de su autoridad central, comunicándolo por vía diplomática a la otra parte.

3. A los efectos del presente Convenio, las autoridades centrales se comunicarán directamente entre sí, procurando hacer uso de las nuevas tecnologías, con miras a la resolución de las cuestiones que se susciten durante la tramitación de los procedimientos de traslado.

4. No obstante lo anterior, las Partes podrán recurrir a la vía diplomática para el envío o recepción de solicitudes de traslado o de información relativa a los mismos, cuando lo consideren necesario por las especiales circunstancias que concurran en el caso.

Artículo 6

Peticiones y respuestas

1. La petición de traslado, dirigida a las autoridades centrales designadas en el presente convenio, se formulará por escrito o bien por cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan establecer su autenticidad.

2. La respuesta podrá ser comunicada por las mismas vías.

3. El Estado de cumplimiento comunicará al Estado de condena, a la mayor brevedad, su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado.

Artículo 7

Documentación justificativa

1. El Estado de cumplimiento, a petición del Estado de condena, facilitará a este último:

- a) Un documento o una declaración que indique que el condenado es nacional de dicho Estado;
- b) Una copia de las disposiciones legales del Estado de cumplimiento de las cuales resulte que los hechos que hayan dado lugar a la condena son constitutivos de delito.

2. El Estado de condena deberá facilitar al Estado de cumplimiento los documentos que a continuación se expresan:

- a) Copia certificada de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas;
- b) La indicación de la duración de la condena o medida de seguridad, el tiempo ya cumplido y el que quedare por cumplir o la fecha de cumplimiento definitivo;
- c) Un documento en el que conste el consentimiento del condenado para el traslado;
- d) Cuando proceda, informe médico o social acerca del condenado, información sobre su tratamiento en el Estado de condena y recomendación para la continuación de su tratamiento en el Estado de cumplimiento.

Artículo 8

Consentimiento y verificación

1. El Estado de condena se asegurará de que el condenado que preste su consentimiento en los términos del artículo 3.1.d) lo haga libre y voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias jurídicas que de ello se deriven.

2. El procedimiento que se siga a este respecto se regirá por la ley del Estado de condena.

Artículo 9

Ejecución de la pena

1. El condenado continuará cumpliendo en el Estado de cumplimiento la pena o medida de seguridad impuesta en el Estado de condena, de acuerdo con la ley del Estado de cumplimiento.

2. En ningún caso puede modificarse, por su naturaleza o por su duración, la pena o medida de seguridad privativa de libertad pronunciada por el Estado de condena.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, en aquellos casos en que la condena que reste por cumplir sea, por su duración, incompatible con el límite máximo previsto en la legislación del Estado de cumplimiento, se considerará convertida al límite máximo prescrito por esta legislación. A tal efecto, el Estado de cumplimiento no estará obligado a respetar los límites máximos previstos en su legislación para el mismo delito.

4. El Estado de condena conservará plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus tribunales, y para la resolución de cualquier recurso extraordinario interpuesto contra las mismas.

Artículo 10

Non bis in idem

El condenado trasladado para la ejecución de una condena conforme al presente Convenio no podrá ser detenido, procesado ni condenado en el Estado de cumplimiento por los mismos hechos que motivaron la pena impuesta.

Artículo 11

Indulto, amnistía, conmutación

1. El Estado de condena o el Estado de cumplimiento, con consentimiento del primero, podrá conceder la amnistía, el indulto, la conmutación de la pena o medida de seguridad o adoptar cualquier decisión o medida legal que entrañe una reducción de la pena o medida de seguridad.

2. Las solicitudes del Estado de cumplimiento a que se refiere el apartado anterior, deberán ser motivadas.

Artículo 12

Cesación del cumplimiento

El Estado de cumplimiento deberá poner fin al cumplimiento de la condena en cuanto haya sido informado por el Estado de condena de cualquier decisión o medida que tenga como efecto quitar a la condena su carácter ejecutorio.

Artículo 13

Cargas económicas

1. La entrega del penado por las autoridades del Estado de condena a las autoridades del Estado de cumplimiento se efectuará en el lugar en que convengan las Partes en cada caso.

2. El Estado de cumplimiento se hará cargo de los gastos del traslado.

Artículo 14

Lenguas

1. Las informaciones previstas en el artículo 7, serán transmitidas en la lengua de la Parte a la cual se dirijan.

2. Las comunicaciones entre las autoridades centrales a que se refiere el artículo 5, se realizarán en las lenguas respectivas.

Artículo 15

Régimen de libertad condicional

1. El condenado bajo el régimen de libertad condicional podrá ser trasladado para cumplir dicha condena bajo la vigilancia de las autoridades del Estado de cumplimiento.

2. El Estado de cumplimiento adoptará las medidas de vigilancia solicitadas y mantendrá informado al Estado

de condena sobre la forma en que se llevan a cabo. En caso de incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que éste haya asumido, se lo comunicará de inmediato al Estado de condena.

Artículo 16

Resolución de controversias

Las partes procurarán resolver cualquier divergencia sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio a través de consultas entre las autoridades centrales. Si persistieran las divergencias se recurrirá a la vía diplomática.

Artículo 17

Entrada en vigor

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última notificación por vía diplomática en la que se haga constar el cumplimiento de las formalidades constitucionales requeridas en cada uno de los Estados.

Artículo 18

Vigencia y terminación

1. El presente Convenio tendrá una duración indefinida.

2. Cada una de las Partes podrá denunciar el presente Convenio por escrito y por vía diplomática. La denuncia surtirá efectos transcurridos 6 meses desde la fecha de la notificación

3. El presente Convenio podrá aplicarse al cumplimiento de condenas a penas o medidas de seguridad privativas de libertad, dictadas con anterioridad o en fecha posterior a la entrada en vigor del presente Convenio.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a este efecto por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio.

Hecho en Madrid, el día 20 de marzo de 2007, en dos originales, en idiomas portugués y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República de Cabo Verde, *José Manuel Gomes Andrade*, Ministro de Justicia.

Por el Reino de España "A.R.", *Mariano Fernández Bermejo*, Ministro de Justicia.

ACORDO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS CONDENADAS ENTRE A REPÚBLICA DE CABO VERDE E O REINO DE ESPANHA

A República de Cabo Verde e o Reino de Espanha, adiante denominados "Partes".

Desejando aprofundar as relações jurídicas entre ambos Estados e facilitar a cooperação no âmbito judicial, assim como favorecer a reinserção social das pessoas que foram objecto de condenação em qualquer dos dois países, concordaram concluir este Acordo sobre execução recíproca de decises judiciais em matéria penal,

Concordaram o seguinte:

Artigo 1º

Definições

Para os efeitos do presente Acordo, a expressão:

- a) "Estado de condenação" designa o Estado onde foi condenada a pessoa que pode ser transferida ou que já o foi;
- b) "Estado de cumprimento" designa o Estado para o qual o condenado pode ser ou já foi transferido, com o propósito de cumprir uma condenação;
- c) "Sentença" designa uma decisão judicial transitada em julgado que tenha aplicado uma pena ou medida de segurança privativa de liberdade;
- d) "Condenado" designa a pessoa que esteja a cumprir uma pena ou medida de segurança privativa de liberdade aplicada por uma sentença transitada em julgado no Estado onde foi condenado.

Artigo 2º

Princípios gerais

1. As Partes comprometem-se a prestar mutuamente a mais alargada colaboração possível em matéria de transferência de pessoas condenadas nas condições previstas no presente Acordo.

2. As penas ou medidas de segurança impostas em Espanha a nacionais de Cabo Verde podem, ser cumpridas nos estabelecimentos prisionais deste país ou sob a supervisão das autoridades cabo-verdianas, em conformidade com as disposições do presente Acordo.

3. As penas ou medidas de segurança impostas em Cabo Verde a nacionais de Espanha podem ser cumpridas em estabelecimentos prisionais deste país ou sob a supervisão de autoridades espanholas, em conformidade com as disposições do presente Acordo.

4. A transferência pode ser solicitada tanto pelo Estado de condenação como pelo Estado de cumprimento.

Artigo 3º

Condições de transferência

1. Uma transferência pode ter lugar nos termos do presente Acordo unicamente nas seguintes condições:

- a) O condenado ser nacional do Estado de cumprimento;
- b) A sentença ter transitado em julgado;
- c) A duração da pena ou medida de segurança ainda por cumprir pelo condenado deve ser pelo menos de um ano, no dia da recepção do pedido;
- d) O condenado, ou o seu representante legal, em caso de incapacidade do condenado, deve consentir expressamente na transferência;
- e) Os factos pelos quais a pessoa foi condenada devem constituir crime de acordo com a lei do Estado de cumprimento ainda que não exista identidade na tipificação;
- f) O Estado de condenação e o Estado de cumprimento devem estar de acordo quanto à transferência.

2. Em casos excepcionais, as partes podem acordar numa transferência, mesmo que a pena por cumprir seja inferior à prevista na alínea c) do n.º 1.

3. As partes podem acordar a aplicação das disposições do presente Acordo às penas e medidas de segurança impostas a menores de idade, nos termos da respectiva legislação nacional. Em qualquer caso, é obrigatório o consentimento expresso do representante legal do menor.

Artigo 4.º

Dever de informação

1. O Estado de condenação deve informar o condenado que possa beneficiar do presente Acordo da sua existência e conteúdo.

2. Se o condenado expressar ao Estado de condenação o desejo de ser transferido ao abrigo do presente Acordo, este deve transmitir a solicitação ao Estado de cumprimento com a maior brevidade possível juntamente com as informações referidas no número 4.

3. Se o condenado expressar ao Estado de cumprimento o seu desejo de ser transferido ao abrigo do presente Acordo, o Estado de condenação deve fornecer a pedido do estado de cumprimento, as informações referidas no número seguinte.

4. As informações devem incluir:

- a) O nome, a data e o lugar exacto de nascimento do condenado, assim como o nome dos seus pais;
- b) Uma exposição dos factos que deram origem à condenação;
- c) A natureza, a duração e a data de início e de término da pena ou medida de segurança.

5. O condenado deve ser informado, por escrito, do tratamento dado ao pedido feito nos termos dos números anteriores bem como de quaisquer decisões tomadas por qualquer um dos Estados relativamente ao mesmo.

Artigo 5.º

Autoridades Centrais

1. Cada Parte designa uma Autoridade Central encarregada de enviar e receber directamente os pedidos de transferência, conforme estabelecido no presente Acordo.

2. Por parte de Espanha a Autoridade Central é o Ministério de Justiça. Por parte de Cabo Verde a Autoridade Central é o Ministério da Justiça. Qualquer das Partes pode modificar a designação da Autoridade Central através de comunicação por via diplomática à outra Parte.

3. Para efeitos do presente Acordo, as Autoridades Centrais devem comunicar directamente entre si, procurando fazer uso das novas tecnologias, com vista à resolução das questões que surgirem durante a tramitação dos pedidos de transferência.

4. As Partes, sem prejuízo do disposto no número anterior, podem recorrer à via diplomática para o envio ou recepção de pedidos de transferência ou de informação relativa mesma, quando o considerarem necessário pelas especiais circunstâncias que concorrem no caso.

Artigo 6.º

Petições e respostas

1. O pedido de transferência, dirigido às autoridades centrais designadas no presente Acordo, deve ser formulado por escrito ou por quaisquer meios susceptíveis de dar origem a um registo escrito em condições que permitam ao Estado receptor determinar a sua autenticidade.

2. A resposta pode ser comunicada pelas mesmas vias.

3. O Estado de cumprimento deve comunicar ao Estado de condenação, com a máxima brevidade possível a sua decisão de aceitar ou recusar a transferência solicitada.

Artigo 7.º

Documentação justificativa

1. O Estado de cumprimento, a pedido do Estado de condenação, deve facultar a este último:

- a) Documento ou declaração que indique que o condenado é nacional do Estado de cumprimento;
- b) Cópia das disposições legais das quais resulte que os factos que deram lugar à condenação constituem crime no direito do Estado de cumprimento.

2. O Estado de condenação deve facultar ao Estado de cumprimento os seguintes documentos:

- a) Cópia certificada da sentença e das disposições legais aplicadas;
- b) A indicação da duração da pena ou medida de segurança, o tempo já cumprido e o tempo que falta cumprir ou a data de cumprimento definitivo;
- c) Documento do qual conste o consentimento do condenado para a transferência;
- d) Quando aplicável, informação médica ou social acerca do condenado, informação sobre tratamento em curso no Estado de condenação e recomendação para a continuação do tratamento no Estado de cumprimento.

Artigo 8.º

Consentimento e verificação

1. O Estado de condenação deve assegurar-se de que o condenado presta o consentimento nos termos da alínea d) do número 1 do artigo 3.º de forma livre, voluntária e com plena consciência das consequências jurídicas daí decorrentes.

2. O processo para a prestação de tal consentimento rege-se pela lei do Estado de condenação.

Artigo 9º

Execução da pena

1. O condenado continua a cumprir a pena ou medida de segurança nos termos da lei do Estado de cumprimento.

2. A pena ou medida de segurança privativa de liberdade imposta pelo Estado de condenação não pode, em caso algum, ser modificada, quanto à sua natureza ou duração.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos casos em que a pena que falta cumprir seja pela sua duração incompatível com o limite máximo previsto pela lei do Estado de cumprimento considera-se essa parte convertida a esse limite máximo. Para este efeito, o Estado de cumprimento não está obrigado a respeitar os limites máximos previstos na sua lei para o mesmo crime.

4. O Estado de condenação conserva plena jurisdição para a revisão das sentenças aplicadas pelos seus tribunais, e para a decisão de qualquer recurso extraordinário interposto contra as mesmas.

Artigo 10º

“Non bis in idem”

A pessoa transferida para a execução de uma condenação nos termos do presente Acordo não pode ser detida, processada ou condenada no Estado de cumprimento pelos mesmos factos que deram origem a condenação.

Artigo 11º

Indulto, amnistia, comutação

1. O Estado de condenação ou o Estado de cumprimento, com consentimento do primeiro, podem conceder a amnistia, o indulto, a comutação da pena ou medida de segurança ou adoptar qualquer decisão ou medida legal que acarrete uma redução da pena ou medida de segurança.

2. O pedido de consentimento do Estado de cumprimento, a que se refere o número anterior, deve ser fundamentado.

Artigo 12º

Cessaçã do cumprimento

O Estado de cumprimento deve pôr fim à execução da condenação logo que seja informado pelo Estado da condenação de qualquer decisão ou medida que tenha como efeito retirar à condenação o seu carácter executório.

Artigo 13º

Despesas

1. A entrega do condenado pelas autoridades do Estado de condenação às autoridades do Estado de cumprimento deve ser efectuada no lugar convencionado pelas Partes em cada caso.

2. As despesas com a transferência são suportadas pelo Estado de cumprimento.

Artigo 14º

Línguas

1. As informações previstas no artigo 7º serão transmitidas na língua da Parte à qual são dirigidas.

2. As comunicações entre as autoridades centrais a que se refere o artigo 5º serão realizadas nas respectivas línguas.

Artigo 15º

Regime de Liberdade Condicional

1. O condenado em regime de liberdade condicional no Estado de condenação pode ser transferido para cumprir a condenação sob a vigilância das autoridades do Estado de cumprimento.

2. O Estado de cumprimento deve adoptar as medidas de vigilância solicitadas e manter o Estado de condenação informado sobre a sua execução. O incumprimento por parte do condenado das obrigações que tenha assumido deve ser imediatamente comunicado ao Estado de condenação.

Artigo 16º

Resolução de controvérsias

Qualquer controversia que surja entre as Partes, relacionada com a interpretação ou aplicação deste acordo, deve ser resolvida mediante consulta entre as Autoridades Centrais. Em caso de não se chegar a um acordo, deve recorrer-se à via diplomática.

Artigo 17º

Entrada em vigor

O presente Acordo entra em vigor no primeiro dia do segundo mês após a data da última notificação por via diplomática em que uma das partes informa a outra do cumprimento das formalidades constitucionais exigidas pela respectiva ordem jurídica interna.

Artigo 18º

Duração e termo do Acordos

1. O presente Acordo é celebrado por tempo indeterminado.

2. Cada uma das Partes pode denunciar o presente Acordo mediante notificação escrita, por via diplomática. A denúncia terá efeito 6 meses após da data da sua notificação.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados pelos respectivos Governos, assinaram o presente Acordo.

Feito em Madrid, no dia 20 Março de 2007, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e espanhola, ambos os textos fazendo igualmente fé.

Pela República de Cabo Verde, *José Manuel Gomas Andrade*, Ministro da Justiça.

Pelo Reino de Espanha, *Mariano Fernández Bermejo*, Ministro da Justiça.

Resolução n.º 69/VII/2008

de 14 de Abril

A Assembleia Nacional vota, nos termos da alínea b) do artigo 178.º da Constituição, a seguinte Resolução:

Artigo 1.º

É aprovado, para ratificação, o Acordo sobre Extradicação entre a República de Cabo Verde e o Reino de Espanha, assinado em Madrid no dia 20 de Março de 2007, cujos textos autênticos em português e espanhol fazem parte integrante da presente Resolução.

Artigo 2.º

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e o Acordo referido no artigo anterior produz efeitos em conformidade com o que nele se estipula.

Aprovada em 25 de Março de 2008.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, *Aristides Raimundo Lima*

CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE CABO VERDE Y EL REINO DE ESPAÑA

La República de Cabo Verde, y el Reino de España, denominadas en lo sucesivo “las Partes”;

Deseando mantener y reforzar los lazos que unen a los dos países;

Deseando establecer una cooperación más eficaz entre los dos Estados en la persecución de los delitos y la ejecución de las condenas, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo;

Deseando mejorar los procedimientos de extradición entre los dos Estados, de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales, en orden a la entrega recíproca de los delincuentes;

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

Obligación de extraditar

Las Partes se comprometen a entregarse mutuamente, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, y a solicitud de la otra Parte, a las personas que se encuentren en su territorio y que sean reclamadas por ésta para ser procesadas o para la ejecución de una pena o medida de seguridad privativa de libertad impuesta por sus Tribunales, por un delito que dé lugar a la extradición.

Artículo 2

Delitos que dan lugar a la extradición

1. Sólo se concederá la extradición por causa de delitos que se encuentren tipificados penalmente por la legislación de ambas Partes si se da alguna de las siguientes condiciones:

a) si la solicitud de extradición tiene por objeto el procesamiento de la persona, que el delito esté

castigado en la legislación de ambas Partes con pena de prisión de duración superior a un año;

b) si la solicitud de extradición tiene por objeto la ejecución de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, además del requisito señalado en el párrafo anterior, que el periodo de condena que quede por cumplir por la persona reclamada sea de al menos 6 meses en el momento de formular la solicitud.

2. A la hora de determinar si los hechos constituyen delito conforme a la legislación de ambas Partes, de acuerdo con el párrafo anterior, no tendrá relevancia el hecho de que las respectivas legislaciones no incluyan el acto dentro de la misma categoría de delitos, o que el delito no reciba la misma denominación.

3. Si la solicitud de extradición se refiere a dos o más hechos, cada uno de los cuales constituye delito conforme a la legislación de ambas Partes, y al menos uno de ellos cumple los requisitos de duración de la pena previstos en el apartado 1 de este artículo, la Parte requerida podrá conceder la extradición por todos ellos.

Artículo 3

Motivos de denegación obligatorios

La extradición será denegada si:

a) la Parte requerida considera que el delito por el que se solicita la extradición es un delito político. A tales efectos, no se considerarán delitos políticos los delitos de terrorismo ni cualesquiera otros delitos que la Parte requerida considere excluidos de dicha categoría en virtud de cualquier acuerdo internacional del que sea parte.

b) la Parte requerida posee fundados motivos para pensar que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo o condición, o con la intención de someter a la persona a cualquier otra forma de discriminación, o que la situación de la persona en el procedimiento judicial pueda resultar perjudicada por cualquiera de esas razones;

c) el delito por el que se solicita la extradición constituye un delito exclusivamente militar;

d) la persona reclamada es un nacional de la Parte requerida, o le haya sido concedido por ésta asilo político, en el momento de la comisión de los hechos, en los términos admitidos por la Constitución y por la Ley de la Parte requerida;

e) la acción penal o la pena hayan prescrito conforme a la ley de la Parte requirente;

f) los tribunales de la Parte requerida ya han dictado sentencia firme o concluido un procedimiento

judicial contra la persona reclamada respecto al delito por el que se solicita la extradición, o bien la persona reclamada haya sido juzgada en un tercer Estado por el delito por el cual se solicita la extradición, y haya sido absuelta o hubiera cumplido la correspondiente pena;

- g) la solicitud de extradición es realizada por la Parte requerida a raíz de una sentencia dictada en rebeldía, y la Parte requirente no ofrece garantías de volver a juzgar el caso después de la extradición;
- h) si el delito por el cual se pide la extradición puede ser castigado con la pena de muerte, cadena perpetua o condena de duración indeterminada, según las leyes de la Parte requirente.

Artículo 4

Motivos de denegación facultativos

La extradición se podrá rechazar si:

- a) la Parte requerida posee jurisdicción respecto del delito al que se refiere la extradición, de acuerdo con su legislación interna;
- b) si el delito por el que se solicita la extradición se hubiera cometido fuera del territorio de las dos Partes, y la Parte requerida carece de jurisdicción para conocer de delitos cometidos fuera de su territorio en similares circunstancias;
- c) cuando se solicite la extradición de una persona menor de dieciocho años, y la extradición pudiera perjudicar su readaptación social o rehabilitación.

Artículo 5

Obligación de iniciar procedimientos penales en la Parte requerida

1. Si se deniega la extradición de acuerdo con lo previsto en el apartado d) del artículo 3 y en el apartado a) del artículo 4 del presente Convenio, la Parte requerida deberá, a solicitud de la Parte requirente, someter el caso a sus autoridades competentes con la finalidad de iniciar un procedimiento penal por los hechos que dieron lugar a la solicitud de extradición, de acuerdo con su legislación interna. A tal fin, la Parte requirente proporcionará a la Parte requerida los documentos y pruebas relacionados con el caso.

2. Las partes podrán acordar, en tales casos y en la medida en que lo permitan o lo puedan permitir sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, la entrega temporal de la persona reclamada a efectos de enjuiciamiento por la Parte requirente.

Artículo 6

Autoridades Centrales

1. A efectos del presente Convenio, las Partes se comunicarán entre sí, a través de las respectivas autoridades centrales designadas en el apartado siguiente, sin perjuicio de comunicación por vía diplomática cuando se considere oportuno.

2. La autoridad central de España será el Ministerio de Justicia. La autoridad central de Cabo Verde será la Procuraduría General de la República. Las Partes podrán modificar la designación de su autoridad central, comunicándolo por vía diplomática a la otra parte.

3. A los efectos del presente Convenio, las autoridades centrales se comunicarán directamente entre sí, procurando hacer uso de las nuevas tecnologías, con miras a la resolución de las cuestiones que se susciten durante la tramitación de las solicitudes de extradición.

4. No obstante lo anterior, las Partes podrán recurrir a la vía diplomática para el envío o recepción de solicitudes de extradición o de información relativa a las mismas, cuando lo consideren necesario por las especiales circunstancias que concurran en el caso.

Artículo 7

Solicitud de extradición y documentos necesarios

1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y deberá incluir o ir acompañada de:

- a) el nombre de la autoridad requirente;
- b) el nombre, sexo y nacionalidad, de la persona reclamada y cualquier otra información que pueda ayudar a determinar la identidad de la persona y su posible paradero, así como, si se dispone de ello, una descripción de su apariencia física, fotografías y huellas digitales de la persona;
- c) descripción del caso, con un resumen de los hechos delictivos;
- d) el texto de las disposiciones legales relevantes sobre el establecimiento de la jurisdicción penal, la determinación del delito y la pena que puede imponerse por el mismo; y
- e) el texto de las disposiciones legales relevantes que describan los límites temporales de la acción penal o de la ejecución de la condena.

2. Además de las disposiciones del apartado 1 de este artículo:

- a) la solicitud de extradición dirigida a la persecución penal de la persona reclamada deberá también ir acompañada de una copia de la orden de detención emitida por la autoridad competente de la Parte requirente; o
- b) la solicitud de extradición dirigida a la ejecución de una condena impuesta sobre la persona reclamada, deberá también ir acompañada de una copia de la resolución judicial y un documento que haga constar el periodo de condena cumplida.

3. La solicitud de extradición y los documentos que se envíen en apoyo de la misma deberán ir firmados y sellados, y deberán ir acompañados de una traducción en la lengua de la Parte requerida.

Artículo 8

Información adicional

1. Si la Parte requerida considera que la información facilitada en apoyo de una solicitud de extradición no es suficiente, podrá solicitar que le sea enviada información adicional, debiendo enviarse dicha información en el plazo de 45 días, que podrá ampliarse por causas debidamente justificadas por la Parte requirente.

2. Si la Parte requirente no envía la información adicional en el plazo mencionado, se presumirá que ha renunciado voluntariamente a su solicitud. Ello no impedirá, no obstante, a la Parte requirente presentar una nueva solicitud de extradición por el mismo delito.

Artículo 9

Detención provisional

1. En caso de urgencia, una Parte podrá pedir a la otra la detención provisional de la persona reclamada, a la espera de recibir la solicitud de extradición. La petición se podrá dirigir por escrito mediante los canales previstos en el artículo 6 del presente Convenio, a través de Interpol o por cualquier otro canal acordado por ambas Partes.

2. La solicitud de prisión provisional contendrá los extremos indicados en el apartado 1 del artículo 7 del presente Convenio, una declaración sobre la existencia de los documentos indicados en el apartado 2 del mismo artículo, y una declaración de que la solicitud de extradición será enviada a continuación.

3. La Parte requerida informará con prontitud a la Parte requirente del curso dado a su solicitud.

4. Se pondrá fin a la detención provisional si, en el plazo de 40 días a contar desde la detención de la persona reclamada, la autoridad competente de la Parte requerida no ha recibido la solicitud formal de extradición. Se podrá ampliar ese plazo en 15 días más, a solicitud de la Parte requirente, debidamente justificada.

5. La puesta en libertad de la persona de acuerdo con el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la extradición de la persona reclamada si la Parte requerida recibe con posterioridad la solicitud formal de extradición.

Artículo 10

Decisión sobre la solicitud de extradición

1. La Parte requerida decidirá sobre la solicitud de extradición de conformidad con los procedimientos previstos por su legislación interna, e informará con prontitud a la Parte requirente de su decisión.

2. Si la Parte requerida deniega total o parcialmente la solicitud, informará a la Parte requirente de los motivos de denegación.

3. La denegación de la extradición por motivos de fondo impedirá a la Parte requirente presentar una nueva solicitud de extradición contra la misma persona y por los mismos hechos.

Artículo 11

Extradición con consentimiento de la persona

1. La persona detenida a efectos de extradición puede consentir a su entrega al Estado requirente, con carácter irrevocable. En tal caso, el juez acordará la entrega de la persona al Estado requirente sin necesidad de recibir los documentos previstos en el artículo 7 del presente Convenio.

2. La persona reclamada, su abogado y el representante del Ministerio Fiscal deberán firmar la declaración por la que la persona consiente a la entrega.

3. El juez deberá verificar que se cumplen todas las condiciones para conceder la extradición, y oír a la persona reclamada para asegurarse de que el consentimiento se ha prestado libremente y con pleno conocimiento de sus consecuencias, en particular de su carácter irrevocable. En caso afirmativo, ratificará la declaración y ordenará la entrega de la persona al Estado requirente.

4. La declaración así ratificada equivale, a todos los efectos, a la decisión que pone fin al procedimiento de extradición.

Artículo 12

Entrega de la persona

1. Si la Parte requerida concede la extradición, ambas Partes acordarán el lugar, la hora y cualquier otra circunstancia relativa a la ejecución de la extradición. Entretanto, la Parte requerida informará a la Parte requirente del periodo de tiempo durante el que la persona ha permanecido detenida antes de la entrega.

2. Si la Parte requirente no ha recogido a la persona en un plazo de 30 días después de la fecha acordada para la ejecución de la extradición, la Parte requerida pondrá a la persona en libertad inmediatamente y podrá rechazar una nueva solicitud de extradición de la Parte requirente referida a la misma persona y por los mismos hechos, salvo que el apartado 3 de este artículo disponga lo contrario.

3. Si una de las Partes no entrega o no va a recoger a la persona dentro del plazo acordado por razones ajenas a su voluntad, la otra Parte será notificada con prontitud. Las Partes acordarán nuevamente los términos de la ejecución de la extradición, y será de aplicación lo previsto en el apartado 2 de este artículo.

Artículo 13

Aplazamiento de la entrega y entrega temporal

1. Si la persona reclamada está siendo procesada o está cumpliendo condena en la Parte requerida por un delito distinto a aquel por el que se solicita la extradición, la Parte requerida podrá, después de haber acordado conceder la extradición, aplazar la entrega hasta tanto no concluya el procedimiento penal o el cumplimiento de la pena. La Parte requerida informará a la Parte requirente del aplazamiento de la entrega.

2. Si el aplazamiento de la entrega a que se refiere el párrafo anterior puede provocar el transcurso del plazo

de prescripción de la acción, o dificultar las investigaciones del delito en la Parte requirente, la Parte requerida puede, en la medida que lo permita su legislación, entregar temporalmente a la persona reclamada a la Parte requirente, de acuerdo con los términos y condiciones que se acuerden por ambas Partes. La Parte requirente devolverá con prontitud a la persona a la Parte requerida, una vez que haya concluido el procedimiento.

Artículo 14

Solicitudes de extradición formuladas por varios países

1. Si la extradición de una misma persona hubiera sido solicitada por una de las Partes y uno o más terceros países, la Parte requerida decidirá a cuál de ellos entregará al reclamado, y notificará su decisión a la Parte requirente.

2. Cuando las solicitudes se refieran al mismo delito, la Parte requerida dará preferencia a la solicitud del Estado en cuyo territorio se cometió el delito, salvo que existan circunstancias particulares que aconsejen otra cosa, como la nacionalidad, el domicilio habitual de la persona, o la fecha de las solicitudes.

3. Cuando las solicitudes se refieran a delitos distintos, la Parte requerida dará preferencia a la que se refiera al delito considerado más grave conforme a sus leyes, salvo que circunstancias particulares aconsejen otra cosa.

Artículo 15

Principio de especialidad

La persona extraditada de conformidad con el presente Convenio no será procesada o sometida a la ejecución de una condena en la Parte requirente, por delitos cometidos por dicha persona con anterioridad a su entrega, distintos a aquel por el que se concedió la extradición, ni podrá ser re-extraditada a un tercer país, a menos que:

- a) la Parte requerida haya prestado su consentimiento previo. A tal efecto, la Parte requerida podrá exigir el envío de la documentación y la información mencionada en el artículo 7, junto con una declaración de la persona extraditada en relación con los delitos en cuestión;
- b) la persona no haya abandonado el territorio de la Parte requirente en el plazo de 30 días después de haber sido puesta en libertad. No obstante, este periodo no incluirá el tiempo durante el cual la persona no haya podido abandonar el territorio de dicha Parte por razones ajenas a su voluntad; o
- c) la persona haya regresado voluntariamente al territorio de la Parte requirente después de haberlo abandonado.

Artículo 16

Entrega de objetos

1. Si la Parte requirente lo solicita, la Parte requerida deberá, en la medida que lo permita su legislación interna, confiscar los productos e instrumentos del delito y cualesquiera otros bienes que se encuentren en su territorio, que puedan servir como prueba, y si se concede la extradición, deberá entregarlos a la Parte requirente.

2. Cuando se conceda la extradición, los objetos mencionados en el párrafo anterior podrán ser entregados incluso aunque no se pueda efectuar la extradición debido al fallecimiento, desaparición o huida de la persona reclamada.

3. La Parte requerida podrá, con el fin de llevar a cabo otro procedimiento penal pendiente, aplazar la entrega de los objetos mencionados hasta la conclusión del mismo, o entregar temporalmente dichos objetos con la condición de que sean devueltos por la Parte requirente.

4. La entrega de objetos se entenderá sin perjuicio de los legítimos derechos de la Parte requerida o de terceros sobre los mismos. Si existen tales derechos, la Parte requirente deberá, a solicitud de la Parte requerida, devolver con prontitud los objetos entregados, sin coste alguno para la Parte requerida y tan pronto como sea posible después de la conclusión del procedimiento.

Artículo 17

Tránsito

1. Si una de las Partes debe extraditar a una persona desde un tercer Estado a través del territorio de la otra Parte, solicitará a ésta autorización para el tránsito. No será necesaria la autorización si se realiza por vía aérea y no se prevé aterrizar en el territorio de dicha Parte.

2. La Parte requerida autorizará el tránsito solicitado por la Parte requirente, en la medida en que no resulte contrario a su legislación.

Artículo 18

Notificación del resultado

La Parte requirente facilitará con prontitud a la Parte requerida información relativa al procedimiento o la ejecución de la condena contra la persona extraditada, o información relativa a la re-extradición de dicha persona a un tercer país.

Artículo 19

Gastos

Los gastos que se deriven de los procedimientos de extradición en la Parte requerida serán asumidos por dicha Parte. Los gastos de transporte y de tránsito relacionados con la entrega o recogida de la persona extraditada serán asumidos por la Parte requirente.

Artículo 20

Resolución de controversias

Las partes procurarán resolver cualquier divergencia sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio a través de consultas entre las autoridades centrales. Si persistieran las divergencias se recurrirá a la vía diplomática.

Artículo 21

Entrada en vigor

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última notificación por vía diplomática en la que se haga constar el cumplimiento de las formalidades constitucionales requeridas en cada uno de los Estados.

Artículo 22

Vigencia y terminación

1. El presente Convenio tendrá una duración indefinida.

2. Cada una de las Partes podrá denunciar el presente Convenio por escrito y por vía diplomática. La denuncia surtirá efectos transcurridos 6 meses desde la fecha de notificación.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a este efecto por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio.

Hecho en Madrid, el día 20 de marzo de 2007, en dos originales, en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Pela República de Cabo Verde, *José Manuel Gomas Andrade*, Ministro da Justiça.

Pelo Reino de Espanha, “A.R.” *Mariano Fernández Bermejo*, Ministro da Justiça.

ACORDO SOBRE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA DE CABO VERDE E O REINO DE ESPANHA

A República de Cabo Verde e o Reino de Espanha, adiante denominados “Partes”.

Desejando manter e reforçar os laços que unem os dois países;

Desejando estabelecer uma cooperação mais eficaz entre os dois Estados na perseguição de crimes e na execução das condenações, especialmente na luta contra o crime organizado e o terrorismo;

Desejando melhorar os procedimentos de extradição entre os dois Estados, em conformidade com as suas leis e procedimentos nacionais, para efeitos da entrega recíproca de delinquentes;

Acordaram o seguinte:

Artigo 1º

Obrigaçãõ de extraditar

As Partes obrigam-se a entregar reciprocamente, de acordo com as disposições do presente Acordo, e a pedido da outra Parte, as pessoas que se encontrem no seu território e que sejam procuradas, para fins de procedimento criminal ou para cumprimento de pena ou medida de segurança privativa de liberdade imposta pelo tribunal do Estado requerente por um crime que d lugar a extradição.

Artigo 2º

Crimes que dão lugar à extradição

1. A extradição só é concedida por crimes tipificados pela legislação penal de ambas as Partes quando ocorra alguma das seguintes condições:

- a) Se a extradição for requerida para procedimento criminal que o crime seja punido pela legislação de ambas Partes com pena de prisão de duração superior a um ano; ou

- b) Se a extradição for requerida para cumprimento de pena ou medida de segurança privativa de liberdade, para além do disposto na alínea anterior, o período de condenação por cumprir pela pessoa procurada deve ser de pelo menos seis meses no momento da formulação do pedido.

2. No momento de determinar se os factos constituem crime na legislação de ambas as Partes, de acordo com o disposto no número anterior, não releva o facto das respectivas legislações não incluírem o acto dentro da mesma categoria de crimes, ou que o crime não receba a mesma denominação.

3. Se o pedido de extradição tiver por objecto dois ou mais factos, cada um dos quais constituir crime tipificado na legislação de ambas as Partes, e pelo menos um deles cumprir os requisitos de duração da pena, previstos no número 1 deste artigo, a Parte requerida pode conceder a extradição para todos eles.

Artigo 3º

Motivos de recusa obrigatórios

A extradição é recusada se:

- a) O pedido tiver por objecto uma infracção de natureza política ou com ela conexas. Não são consideradas infracções políticas os crimes de terrorismo nem quaisquer outros delitos que a Parte requerida considere excluídos desta categoria em virtude de qualquer Acordo internacional de que seja Parte;
- b) Existirem fundados motivos para crer que o pedido de extradição foi apresentada para perseguir a pessoa procurada em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, origem étnica, convicções políticas, sexo ou qualquer outra forma de discriminação ou que a situação dessa pessoa pode ser agravada por qualquer dessas razões;
- c) O pedido tiver por objecto crimes considerados pelo Estado requerido como exclusivamente militares;
- d) A pessoa procurada for um nacional da Parte requerida ou lhe tenha sido por esta concedido asilo político, no momento da prática dos factos, nos termos admitidos pela Constituição e pela lei da Parte requerida;
- e) O procedimento criminal ou a pena tiverem prescrito nos termos da lei da Parte requerente;
- f) Os tribunais da Parte requerida tiverem proferido sentença transitada em julgado ou concluído procedimento criminal contra a pessoa cuja extradição tiver sido requerida pelo mesmo crime pelo qual tiver sido solicitada a extradição, ou que a pessoa cuja extradição é requerida tenha sido julgada num terceiro Estado pelo mesmo crime e tenha sido absolvida ou tenha cumprido a pena correspondente;

- g) O pedido de extradição for feito com base numa sentença à revelia, e a Parte requerente não oferece garantias de voltar a julgar o caso depois da extradição;
- h) Se o crime pelo qual se solicita a extradição puder ser punido com a pena de morte ou pena prisão perpétua ou pena de duração indeterminada segundo as leis da Parte requerente.

Artigo 4º

Motivos de recusa facultativos

A extradição pode ser recusada se:

- a) A Parte requerida tiver jurisdição relativamente ao crime a que se refere a extradição, de acordo com a sua legislação interna;
- b) O crime pelo qual a extradição for solicitada tiver sido cometido fora do território das duas Partes, e a Parte requerida careça de jurisdição para o seu conhecimento nessas circunstâncias;
- c) Se tratar de menor de dezoito anos e a extradição puder prejudicar a sua reinscrção social ou reabilitação.

Artigo 5º

Obrigaçõ de iniciar procedimentos penais na Parte requerida

1. Se a extradição tiver sido recusada nos termos previstos na alínea d) do artigo 3º e alínea a) do artigo 4º do presente Acordo, a Parte requerida deve, a pedido da Parte requerente, submeter o caso às suas autoridades competentes a fim de iniciar o procedimento criminal, de acordo com a sua legislação interna, pelos factos que deram lugar ao pedido de extradição. Para esse efeito, a Parte requerente deve transmitir à Parte requerida os documentos e provas relacionados com o caso.

2. As partes podem convencionar, nestes casos, na medida em que seja permitido ou venha a ser permitido pelos respectivos ordenamentos jurídicos a entrega temporária da pessoa reclamada para efeitos de julgamento na Parte requerente.

Artigo 6º

Autoridades Centrais

1. Para efeitos do presente Acordo as Partes comunicarão entre si através das respectivas autoridades centrais designadas no número seguinte, sem prejuízo de comunicação por via diplomática quando se considere conveniente

2. Por parte de Espanha a Autoridade Central é o Ministério de Justiça. Por parte de Cabo Verde a Autoridade Central é a Procuradoria-geral da República. Qualquer das Partes pode modificar a designação da Autoridade Central através de comunicação por via diplomática á outra Parte.

3. Para efeitos do presente Acordo, as Autoridades Centrais devem comunicar directamente entre si, procurando fazer uso das novas tecnologias, com vista á resolução das questões que surgirem durante a tramitação dos pedidos de extradição.

4. As Partes, sem prejuízo do disposto no número anterior, podem recorrer a via diplomática para o envio ou recepção de pedidos de extradição ou de informação relativa á mesma, quando o considerarem necessário pelas especiais circunstâncias que concorrem no caso.

Artigo 7º

Pedido de extradição e documentos necessários

1. O pedido de extradição deve ser formulado por escrito e deve incluir ou ser acompanhado de:

- a) Nome da autondade requerente;
- b) O nome, sexo e nacionalidade, da pessoa procurada e qualquer outra intonnação que possa ajudar a dcterminnar a sua identidade e o seu possível paradeiro; assim como, quando possível, uma descrição da aparência física, fotografias e impressões digitais da pessoa;
- e) Descrição do caso, com uni resumo dos Factos criminosos;
- d) Texto das disposições legais relevantes para o estabelecimento da unsdição penal, a determinação do crime e a pena aplteavel; e

e) Texto das disposições legais relevantes que estabelecem os limites temporais da acção penal ou da execução da condenação.

2. Além dos documentos previstos no número anterior.

- a) O pedido de extradição destinado à persecução penal da pessoa procurada deve também ser acompanhado de cópia da ordem de detenção emitida pela autoridade competente da Parte requerente; ou
- b) O pedido de extradição destinado à execução de uma condenação aplicada à pessoa procurada deve ser acompanhado de cópia da decisão judicial e de documento do qual conste o período de condenação cumprido.

3. O pedido de extradição e os documentos que o acompanhem devem ser assinados e carimbados e acompanhados de tradução na língua da País requerida.

Artigo 8º

Informação adicional

1. Se a Parte requerida considera que a informação facultada no âmbito de um pedido de extradição não é suficiente pode solicitar que lhe seja enviada informação adicional, no prazo de 45 dias. Esse prazo pode ser prorrogado mediante pedido devidamente fundamentado pela Parte requerente.

2. Se a Parte requerente não enviar a informação adicional nos prazos mencionados, presume-se que renunciou voluntariamente ao pedido. Isto não impede a Parte requerente de apresentar um novo pedido de extradição pelo mesmo delito.

Artigo 9.º

Detenção provisória

1. Em caso de urgência, uma Parte pode pedir à outra a detenção e prisão preventiva da pessoa procurada, até à apresentação do pedido de extradição. O pedido pode ser dirigido por escrito através dos canais previstos no artigo 6.º do presente Acordo, através da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) ou por qualquer outro canal acordado por ambas Partes.

2. O pedido de detenção e prisão preventiva deve conter os elementos indicados no número 1 do artigo 7.º do presente Acordo, uma declaração sobre a existência dos documentos indicados no número 2 do mesmo artigo, e uma declaração de que o pedido de extradição será enviado em seguida.

3. A Parte requerida deve informar com prontidão a Parte requerente do tratamento dado ao seu pedido.

4. A detenção provisória cessa se, no prazo de 40 dias a contar da detenção da pessoa procurada, a autoridade competente da Parte requerida não receber o pedido formal de extradição. Este prazo pode ser ampliado por mais 15 dias, por pedido da Parte requerente, devidamente justificado.

5. A libertação de uma pessoa nos termos do número anterior não obsta à instauração do processo de extradição da pessoa procurada, se o pedido vier a ser posteriormente recebido.

Artigo 10.º

Decisão sobre o pedido de extradição

1. A Parte requerida deve decidir o pedido de extradição em conformidade com os procedimentos previstos na sua legislação interna, e deve informar com prontidão a Parte requerente de sua decisão.

2. Se a Parte requerida recusar total ou parcialmente o pedido, ela deve informar a Parte requerente dos motivos da recusa.

3. A recusa da extradição por motivos de fundo impede a Parte requerente de apresentar um novo pedido de extradição contra a mesma pessoa e pelos mesmos factos.

Artigo 11.º

Extradição com consentimento

1. A pessoa detida para efeitos de extradição pode consentir na sua entrega ao Estado requerente, com carácter irrevogável. Neste caso, o juiz decide a entrega da pessoa ao Estado requerente sem necessidade de receber os documentos previstos no artigo 7.º do presente Acordo.

2. A pessoa procurada, o seu advogado e o representante do Ministério Público devem assinar a declaração de consentimento.

3. O juiz deve verificar se estão preenchidas as condições para que a extradição possa ser concedida e deve ouvir o declarante para se certificar que a declaração resulta da sua livre determinação e com conhecimento das suas

consequências e em particular do seu carácter irrevogável, e em caso afirmativo, homologa-a, ordenando a sua entrega ao Estado requerente.

4. A declaração assim ratificada equivale, para todos os efeitos, à decisão que põe fim ao procedimento de extradição.

Artigo 12.º

Entrega da pessoa

1. Se a Parte requerida conceder a extradição, ambas Partes acordarão o lugar, a hora e qualquer outra circunstância relativa à execução da extradição. Em retanto, a Parte requerida informa a Parte requerente do pendo de tempo durante o qual a pessoa permaneceu detida antes da entrega.

2. Se a Parte requerente não retirar a pessoa procurada num prazo de 30 dias após a data acordada para a execução da extradição, a Parte requerida põe a pessoa em liberdade imediatamente e pode recusar um novo pedido de extradição da Parte requerente contra a mesma pessoa e pelos mesmos factos, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

3. Se uma das Partes não entregar ou não retirar a pessoa procurada dentro do prazo acordado por razões alheias à sua vontade, a outra Parte deve ser notificada com prontidão. As Partes acordarão novamente os termos da execução da extradição, sendo aplicável o previsto no número 2 deste artigo.

Artigo 13.º

Diferimento da entrega e entrega provisória

1. Se a pessoa procurada estiver a ser processada ou estiver a cumprir uma condenação na Parte requerida por um crime distinto daquele pelo qual a extradição tiver sido solicitada, a Parte requerida pode, depois de ter decidido conceder a extradição, diferir a entrega enquanto não se concluir o procedimento penal ou o cumprimento da pena. A Parte requerida deve informar a Parte requerente do diferimento da entrega.

2. Se o diferimento da entrega a que se refere o número anterior puder provocar o decurso do prazo de prescrição da acção, ou dificultar as investigações do crime na Parte requerente, a Parte requerida pode, na medida que o permita a sua legislação, entregar provisoriamente a pessoa procurada à Parte requerente, nos termos e condições acordadas por ambas as Partes. A Parte requerente deve devolver imediatamente a pessoa à Parte requerida, uma vez concluído o procedimento.

Artigo 14.º

Pedidos de extradição formulados por vários países

1. Quando a extradição da mesma pessoa for solicitada por uma das Partes e um ou mais terceiros países, a Parte requerida deve decidir a qual destes entrega a pessoa procurada, e notifica a Parte requerente da sua decisão.

2. Quando os pedidos são referentes ao mesmo crime, a Parte requerida deve dar preferência ao pedido do Estado em cujo território se cometeu o crime, salvo se

existirem circunstâncias particulares que aconselham outra decisão, como a nacionalidade, o domicílio habitual da pessoa, ou a data dos pedidos.

3. Quando os pedidos se referem a crimes distintos, a Parte requerida dá preferência ao pedido referente ao crime considerado mais grave conforme as suas leis, salvo se circunstâncias particulares aconselharem outra decisão.

Artigo 15º

Princípio de especialidade

A pessoa extraditada, nos termos do presente Acordo, não será processada ou sujeita à execução de uma condenação na Parte requerente, por crimes cometidos antes da sua entrega, diferentes daquele pelo qual se concedeu a extradição, nem pode ser reextraditada para um terceiro país, a menos que:

- a) A Parte requerida tenha prestado o seu consentimento prévio. Para esse efeito, a Parte requerida pode exigir o envio da documentação e das informações mencionadas no artigo 7º, fazendo acompanhar declarações da pessoa extraditada relativamente aos crimes em questão;
- b) A pessoa extraditada não tiver abandonado o território da Parte requerente no prazo de 30 dias depois de ter sido posta em liberdade. Este prazo não inclui o período durante o qual a pessoa não conseguiu abandonar o território da referida Parte por razões alheias a sua vontade; ou
- c) A pessoa extraditada tiver regressado voluntariamente ao território da Parte requerente depois de tê-lo abandonado.

Artigo 16º

Entrega de objectos

1. Quando solicitado pela Parte requerente, a Parte requerida deve, na medida em que tal for permitido pela sua legislação interna, apreender os produtos e instrumentos do crime e quaisquer outros bens que se encontram no seu território, que possam servir como prova, e se for concedida a extradição, deve entregá-los à Parte requerente.

2. Concedida a extradição, os objectos mencionados no número anterior podem ser entregues, mesmo quando não se possa efectuar a extradição devido ao falecimento, desaparecimento ou fuga da pessoa procurada.

3. A Parte requerida pode, a fim de levar a cabo outro procedimento penal pendente, dirimir a entrega dos objectos mencionados até à conclusão do mesmo, ou entregar temporariamente os referidos objectos com a condição de que sejam devolvidos pela Parte requerente.

4. A entrega de objectos é realizada sem prejuízo dos legítimos direitos da Parte requerida ou de terceiros sobre os mesmos. Quando existirem tais direitos, a Parte requerente deve, a pedido da Parte requerida, devolver os objectos entregues, sem quaisquer custos para a Parte requerida e com a maior brevidade possível após a conclusão do procedimento.

Artigo 17º

Trânsito

1. Se uma das Partes extraditar uma pessoa de um terceiro Estado através do território da outra Parte, deve solicitar a autorização para o trânsito. Não é necessária a autorização quando o trânsito é realizado por via aérea e não esteja prevista aterragem no território da Parte.

2. A Parte requerida autoriza o trânsito solicitado pela Parte requerente, na medida em tal não resulte contrário à sua legislação.

Artigo 18º

Notificação do resultado

A Parte requerente deve facultar com prontidão à Parte requerida informação relativa ao procedimento ou à execução da condenação contra a pessoa extraditada, ou informação relativa à reextradição da mesma pessoa para um terceiro país.

Artigo 19º

Despesas

As despesas decorrentes dos procedimentos de extradição na Parte requerida são assumidas pela mesma. As despesas de transporte e de trânsito relacionadas com a entrega ou recolha da pessoa extraditada são assumidas pela Parte requerente.

Artigo 20º

Resolução de controvérsias

Qualquer controvérsia que surja entre as Partes, relacionada com a interpretação ou aplicação deste acordo, deve ser resolvida mediante consulta entre as Autoridades Centrais. Em caso de não se chegar a um acordo, deve recorrer-se à via diplomática.

Artigo 21º

Entrada em vigor

O presente Acordo entra em vigor no primeiro dia do segundo mês após a data da última notificação por via diplomática em que uma das partes informa a outra do cumprimento das formalidades constitucionais exigidas pela respectiva ordem jurídica interna.

Artigo 22º

Duração e termo do Acordo

1. O presente Acordo é celebrado por tempo indeterminado.

2. Cada uma das Partes pode denunciar o presente Acordo mediante notificação escrita, por via diplomática. A denúncia terá efeito 6 meses após a data da sua notificação.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados pelos respectivos Governos, assinaram o presente Acordo.

Feito em Madrid, no dia 20 Março 2007, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e espanhola, ambos os textos fazendo igualmente fé.

Pela República de Cabo Verde, *José Manuel Gomas Andrade*, Ministro da Justiça.

Pelo Reino de Espanha “A.R.”, *Mariano Fernández Bermejo*, Ministro da Justiça.

Resolução n.º 70/VII/2008

de 14 de Abril

A Assembleia Nacional vota, nos termos da alínea b) do artigo 178.º da Constituição, a seguinte Resolução:

Artigo 1.º

É aprovado, para ratificação, o Acordo de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre a República de Cabo Verde e o Reino de Espanha, assinado em Madrid no dia 20 de Março de 2007, cujos textos autênticos em português e espanhol fazem parte integrante da presente Resolução.

Artigo 2.º

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e o Acordo referido no artigo anterior produz efeitos em conformidade com o que nele se estipula.

Aprovada em 25 de Março de 2008.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, *Aristides Raimundo Lima*

**CONVENIO ENTRE REPÚBLICA DE CABO VERDE
Y EL REINO DE ESPAÑA RELATIVO A LA ASISTENCIA
JUDICIAL EN MATERIA PENAL**

La República de Cabo Verde y El Reino de España, denominadas en lo sucesivo “las Partes”;

Deseando mantener y reforzar los lazos que unen a los dos países;

Conscientes del interés para las dos Partes de promover una cooperación más eficaz entre los dos Estados en la prevención, investigación y persecución de los delitos, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo;

Deseando mejorar la coordinación y la asistencia recíproca en materia penal entre los dos Estados, de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales;

Han convenido en lo siguiente:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. El presente Convenio tiene por finalidad la asistencia jurídica mutua entre las autoridades competentes de ambas Partes, en relación con asuntos de naturaleza penal.

2. De conformidad con las disposiciones del presente Convenio y en cumplimiento de sus respectivos ordenamientos jurídicos, las Partes se comprometen a prestarse la asistencia jurídica más amplia posible para la prevención, investigación y persecución de los delitos, y en cualesquiera actuaciones en el marco de procedimientos del orden jurisdiccional penal que sean de la competencia de las autoridades judiciales de la Parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada.

3. Asimismo, se prestará asistencia de conformidad con el presente Convenio en relación con delitos contra la legislación relativa a impuestos, derechos de aduana, control de cambios y otros asuntos fiscales.

4. El presente Convenio no será de aplicación a:

- a) la detención de personas con fines de extradición, ni a las solicitudes de extradición;
- b) la ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas condenadas;
- c) la asistencia directa a particulares o a terceros Estados.

5. Se prestará la asistencia con independencia de que el hecho que motiva la solicitud constituya o no delito en virtud de las leyes del Estado requerido. Se exceptúa el supuesto de que la asistencia se solicite para la práctica de diligencias relativas a registros, embargos e indemnizaciones, en cuyo caso será necesario que el hecho que da lugar a la solicitud sea constitutivo de delito en el Estado requerido.

6. A los fines del presente Convenio la determinación del delito según la legislación de las partes contratantes no dependerá de que los elementos constitutivos del delito se encuentren calificados de manera diferente o que la terminología legal utilizada sea distinta.

Artículo 2

Autoridades centrales

1. Cada Parte designará una autoridad central encargada de enviar y recibir directamente las solicitudes de asistencia con arreglo al presente Convenio.

2. La autoridad central de España será el Ministerio de Justicia. La autoridad central de Cabo Verde será la Procuraduría General de la República. Las Partes podrán modificar la designación de su autoridad central, comunicándolo por vía diplomática a la otra parte.

3. A los efectos del presente Convenio, las autoridades centrales se comunicarán directamente entre sí, procurando hacer uso de las nuevas tecnologías, con miras a la resolución de las cuestiones que se susciten durante la tramitación de las solicitudes de asistencia.

4. No obstante lo anterior, las Partes podrán recurrir a la vía diplomática para el envío o recepción de solicitudes de asistencia o de información relativa a su ejecución, cuando lo consideren necesario por las especiales circunstancias que concurren en el caso.

Artículo 3

Alcance de la asistencia

La asistencia comprenderá:

- a) La identificación y localización de personas;
- b) La notificación de documentos;
- c) La obtención de pruebas, incluyendo efectos, documentos o archivos;

- d) La ejecución de órdenes de registro, localización e incautación, como medios de obtención de prueba;
- e) La audición de testigos, peritos y acusados, bien directamente o por medio de videoconferencia;
- f) Notificación a testigos, peritos y acusados a efectos de comparecer voluntariamente en el Estado requirente para la práctica de diligencias procesales;
- g) El traslado temporal de personas detenidas para la práctica de diligencias procesales ante las autoridades del Estado requirente;
- h) La búsqueda, inmovilización, confiscación y comiso del producto de las actividades delictivas y de los instrumentos utilizados a tal fin;
- i) La entrega de bienes, incluyendo la restitución de objetos y el préstamo de piezas de convicción;
- j) El intercambio de información relativa a hechos delictivos y el traslado de procedimientos criminales a la otra Parte;
- k) El intercambio de información sobre antecedentes penales y condenas dictadas contra los nacionales de la otra Parte;
- l) Cualquier otra forma de asistencia incluida en el objeto del presente Acuerdo que no sea contraria a la legislación de la Parte requerida.

2. Salvo en el supuesto previsto en el artículo 14.2 y 21, el presente Convenio no faculta a las autoridades de la Parte requirente a realizar en el territorio de la Parte requerida funciones que, según el ordenamiento jurídico de esta Parte, estén reservadas a sus propias autoridades.

Artículo 4

Denegación de la asistencia

1. La Parte requerida denegará la asistencia solicitada en los siguientes supuestos:

- a) Si la solicitud se refiere a un delito de naturaleza política o conexo con un delito de naturaleza política. A tales efectos, no tendrán la consideración de “delitos de naturaleza política” los delitos de terrorismo ni cuales quiera otros delitos que la Parte requerida considere excluidos de dicha categoría en virtud de cualquier Acuerdo internacional del que sea Parte;
- b) En el caso de que la solicitud se refiera a delitos considerados en el Estado requerido como delitos exclusivamente militares;
- c) Si la ejecución de la solicitud pudiera perjudicar su soberanía, seguridad, orden público o sus intereses esenciales;
- d) Si existen motivos fundados para creer que la solicitud de asistencia se ha formulado para investigar o procesar a una persona por causa de

su raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo o condición, o con la intención de someter a esa persona a cualquier otra forma de discriminación, o que la situación de esa persona puede resultar perjudicada por cualquiera de esas razones;

- e) En el caso de solicitudes que impliquen medidas coercitivas, si los actos u omisiones alegados no son constitutivos de delito de acuerdo con la legislación de la Parte requerida;
- f) Si la solicitud se refiere a un delito castigado con pena de muerte en el territorio de la Parte requirente, con cadena perpetua o con una pena de privación de libertad de duración indeterminada.

2. La asistencia también será denegada si:

- a) La infracción fue cometida en el territorio de cualquiera de las partes y habiéndose instruido el correspondiente procedimiento, éste hubiera finalizado mediante sentencia absolutoria o con el archivo de las actuaciones;
- b) La sentencia condenatoria se encuentre totalmente ejecutada o no pueda ser ejecutada según la legislación de la parte requirente;
- c) La acción penal se hubiera extinguido por cualquier otro motivo.

3. La Parte requerida podrá aplazar la asistencia si la ejecución de la solicitud pudiese interferir con una investigación o procedimiento en curso en la Parte requerida.

4. Antes de denegar o aplazar la asistencia en virtud del presente artículo, la Parte requerida, a través de su autoridad central:

- a) Informará con prontitud a la Parte requirente de los motivos de la denegación o aplazamiento; y
- b) Consultará con la Parte requirente para determinar si se puede prestar asistencia en los plazos y condiciones que la Parte requerida considera necesarios.

5. Si la Parte requirente acepta que la asistencia se ejecute en los plazos y condiciones mencionados en la letra b) del apartado anterior presente artículo, deberá cumplir con dichos plazos y condiciones.

CAPÍTULO II

Procedimiento y ejecución de las solicitudes

Artículo 5

Autoridades competentes para solicitar asistencia

Se considerarán autoridades competentes para emitir solicitudes de asistencia con arreglo al presente Convenio las autoridades del Estado requerido que, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, tengan atribuida la competencia para la investigación y enjuiciamiento de delitos.

Artículo 6

Forma de las solicitudes

1. Las solicitudes de asistencia deberán formularse por escrito y llevar la firma de la autoridad competente, No obstante, en caso de urgencia, las solicitudes podrán transmitirse por fax, correo electrónico o cualquier otro medio que deje constancia escrita de su contenido, en condiciones que permitan establecer su autenticidad, debiendo ser confirmadas por el documento original dentro de los 10 días siguientes a su formulación.

2. Las solicitudes de asistencia, así como los documentos que las acompañen, deberán ir acompañados de una traducción en la lengua del Estado requerido.

Artículo 7

Contenido de las solicitudes

1. Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes indicaciones:

- a) El nombre de la autoridad que efectúa la investigación, las actuaciones o el procedimiento a que se refiere la solicitud;
- b) Una descripción del asunto y naturaleza de la investigación, procedimiento o diligencias, con mención del delito concreto al que se refiere;
- c) Una descripción lo más detallada posible de las pruebas, la información o cualquier otro tipo de asistencia que se interese;
- d) Una declaración de la finalidad para la que se solicitan las pruebas, la información o cualquier otro tipo de asistencia, y su conexión con los hechos objeto de investigación;
- e) Una indicación de los textos legales en los que se fundamenta la investigación o el procesamiento.

2. Las solicitudes de asistencia también podrán contener los siguientes elementos en función de la naturaleza de la asistencia solicitada:

- a) Información relativa a la identidad y paradero de la persona a la que se refiera la asistencia solicitada;
- b) Descripción de la relación de dicha persona con la investigación o el procedimiento, con indicación de la forma en la que haya de practicarse la notificación o la toma de declaración, en su caso;
- c) Una lista de las preguntas que deban formularse al testigo o una descripción detallada del asunto sobre el que debe ser interrogado;
- d) Información relativa a los gastos e indemnizaciones a que tiene derecho la persona que comparezca en el Estado requerente;
- e) Descripción precisa del lugar o la persona que deban registrarse y de los objetos que deban embargarse, así como de los bienes sobre los que deba recaer la confiscación o embargo;

f) Requisitos sobre confidencialidad de la solicitud;

g) Descripción del procedimiento especial que la Parte requirente desea que se siga para la ejecución de lo solicitado;

h) Indicación de las autoridades de la Parte requirente que participarán en la ejecución de la solicitud en la Parte requerida;

i) Plazo en el que deberá cumplimentarse la solicitud, y las razones para la urgencia, en su caso;

j) Cualquier otra información que se estime pueda resultar útil a la Parte requerida para la ejecución de la solicitud de asistencia.

Artículo 8

Ejecución de las solicitudes

1. Las solicitudes de asistencia se enviarán directamente a la autoridad central de la Parte requerida, la cual ejecutará sin dilación la solicitud o la transmitirá a las autoridades competentes para su ejecución.

2. La autoridad central de la Parte requerida informará con prontitud a la Parte requirente de cualesquiera circunstancias que pudieran causar una demora considerable en la respuesta a la solicitud.

3. Asimismo, en los términos contemplados en el artículo 4, comunicará con prontitud los motivos del aplazamiento o denegación de la solicitud, así como las condiciones en las que, en su caso, pueda ser ejecutada.

4. La Parte requerida, en la ejecución de la solicitud, se esforzará por mantener el carácter confidencial, en los términos previstos por el artículo 9.

Artículo 9

Confidencialidad y límites en el uso de la información

1. A petición de la Parte requirente, la Parte requerida deberá mantener la confidencialidad sobre la solicitud de asistencia, su contenido y los documentos que la sustentan, así como sobre su concesión o denegación. Si la solicitud no pudiera ser ejecutada sin quebrantar dicha confidencialidad, la Parte requerida deberá comunicarlo a la Parte requirente, la cual determinará si la solicitud debe cumplimentarse en cualquier caso.

2. A petición de la Parte requerida, la Parte requirente deberá mantener la confidencialidad de las pruebas e informaciones suministradas en ejecución de la solicitud de asistencia, salvo en la medida necesaria para su utilización en el procedimiento o investigación para el que fueron solicitadas.

3. La Parte requerida podrá condicionar el cumplimiento de la solicitud a que la información o las pruebas se utilicen exclusivamente en los términos o condiciones que se especifiquen. En cualquier caso, la Parte requerida no podrá usar las pruebas obtenidas ni la información que de ellas se derive para fines distintos de los especificados en la solicitud, sin el consentimiento previo de la autoridad competente de la Parte requerida.

Artículo 10

Ley aplicable

1. La ejecución de las solicitudes de asistencia se realizará según el ordenamiento jurídico de la Parte requerida, y de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

2. Cuando la Parte requirente lo solicite expresamente, la Parte requerida seguirá en la ejecución de la solicitud los procedimientos y formalidades especiales indicados en la misma, a menos que resulten contrarios a su legislación interna.

Artículo 11

Información sobre el estado de la solicitud

1. A solicitud de la autoridad central de la Parte requirente, la autoridad central de la Parte requerida informará en un plazo razonable sobre el trámite dado a la solicitud o el estado en que se encuentra su ejecución.

2. La autoridad central de la Parte requerida informará a la mayor brevedad sobre el resultado del cumplimiento de la solicitud y remitirá toda la información y las pruebas obtenidas a la autoridad central de la Parte requirente.

3. Cuando no haya sido posible cumplir la solicitud, en todo o en parte, la autoridad central de la Parte requerida se lo hará saber con prontitud a la autoridad central de la Parte requirente, informando de las razones para ello.

Artículo 12

Gastos

1. La Parte requerida asumirá los gastos que se ocasionen con motivo de la ejecución de la solicitud con excepción de los siguientes casos, que correrán a cargo del Estado requirente:

- a) Gastos relacionados con el desplazamiento de cualquier persona a solicitud del Estado requirente desde o hacia el territorio del Estado requerido y las dietas e indemnizaciones a que tenga derecho la persona durante su estancia en el Estado requirente como consecuencia de una solicitud en los términos del presente Convenio;
- b) Gastos y honorarios de peritos ocasionados en el territorio del Estado requerido o en el territorio del Estado requirente, así como los gastos de traducción y los gastos extraordinarios derivados del empleo de un procedimiento especial solicitado por el Estado requirente.

2. Si la ejecución de la solicitud ocasionara gastos de naturaleza extraordinaria las partes deberán mantener consultas para determinar los términos y condiciones en que la asistencia solicitada pueda ser prestada.

CAPÍTULO III

Formas de asistencia

Artículo 13

Notificaciones

1. Si la solicitud tuviera por objeto la notificación de una decisión judicial, las autoridades de la Parte requerida practicarán la notificación en la forma prevista por su legislación procesal.

2. Si la solicitud tuviera por objeto la entrega de objetos o documentos, las autoridades de la Parte requerida procederán a la entrega de los mismos.

3. La notificación se efectuará en alguna de las formas previstas por la legislación de la Parte requerida, o en la forma solicitada por la Parte requirente, siempre que no sea incompatible con aquélla.

4. La entrega se acreditará mediante recibo fechado y firmado por el destinatario, o mediante certificación de la autoridad competente que acredite la diligencia. La certificación del cumplimiento será enviada a la Parte requirente. Si la entrega no pudo realizarse, se harán constar los motivos que impidieron la misma.

Artículo 14

Comparecencia en la parte requerida

1. Toda persona que se encuentre en el territorio de la Parte requerida y a la que se le solicite prestar declaración, presentar elementos de prueba o realizar un peritaje, deberá comparecer ante las autoridades competentes de la Parte requerida de conformidad con la legislación de ésta. La Parte requerida procederá a la citación de la persona bajo las sanciones conminatorias que disponga su legislación.

2. La autoridad competente de la Parte requerida autorizará bajo su dirección, la presencia de las autoridades de la Parte requirente indicadas en la solicitud durante la ejecución de las diligencias y les permitirá formular preguntas. La audiencia tendrá lugar según los procedimientos establecidos por la legislación de la Parte requerida o en la forma especial solicitada por la Parte requirente.

3. En el supuesto contemplado en el párrafo anterior, la Parte requerida informará con suficiente antelación del lugar y la fecha en que se realizará la asistencia solicitada. Cuando sea necesario, las autoridades competentes se consultarán por medio de sus Autoridades Centrales, a efectos de fijar una fecha conveniente para las autoridades competentes de ambas Partes.

4. Si la persona referida en el párrafo 1 alega inmunidad, privilegio o incapacidad según el ordenamiento jurídico de la Parte requerida, la autoridad competente de la Parte requerida decidirá antes del cumplimiento de la solicitud, y lo comunicará a la Parte requirente por medio de la Autoridad Central.

5. Si la persona a que se hace referencia en el párrafo 1 alega inmunidad, privilegio o incapacidad según la legis-

lación de la Parte requirente, la autoridad competente de la Parte requerida informará de ello por medio de su Autoridad Central, a fin de que las autoridades competentes de la Parte requirente resuelvan al respecto.

Artículo 15

Comparecencia en la parte requirente

1. Si las autoridades judiciales de la Parte requirente consideran necesaria la comparecencia de un testigo, perito o inculpado en su territorio, para prestar declaración o proporcionar cualquier tipo de información, lo harán constar en la solicitud. Las autoridades de la Parte requerida invitarán a la persona a comparecer en el territorio de la Parte requirente, e informarán a la Parte requirente de la respuesta de la persona a la mayor brevedad.

2. La solicitud que tenga por objeto la citación de un testigo, perito o inculpado ante las autoridades de la Parte requirente, deberá ser recibida en la autoridad central de la Parte requerida con la suficiente antelación a la fecha fijada para la comparecencia.

3. Las solicitudes de citación referidas en este artículo no podrán contener intimación de sanciones ni cláusulas conminatorias; en caso de que las contengan, éstas no surtirán efecto en caso de incomparecencia del testigo, perito o inculpado.

4. En la solicitud, las autoridades de la Parte requirente deberán indicar los gastos de traslado y estancia a su cargo.

Artículo 16

Comparecencia de personas detenidas ante las autoridades de la parte requirente

1. Cualquier persona detenida en la Parte requerida y cuya presencia en la Parte requirente sea necesaria con fines de asistencia con arreglo al presente Convenio, será trasladada al territorio de la Parte requirente, siempre que, tanto la persona en cuestión, como la Autoridad central de la Parte requerida, consientan al traslado. Si la persona detenida no consiente, no podrá ser sometida a ninguna sanción ni medida conminatoria.

2. El traslado podrá ser denegado cuando la presencia de la persona detenida sea necesaria en un proceso penal en curso en el territorio de la Parte requerida, cuando el traslado pueda implicar la prolongación de la detención, o cuando por cualquier otro motivo, la autoridad central de la Parte requerida, considere inconveniente el traslado.

3. Las autoridades de la Parte requirente deberán mantener a la persona trasladada bajo custodia durante todo el tiempo que permanezca en su territorio. El periodo de detención en la Parte requirente será computado a los efectos de la detención preventiva o el cumplimiento de la condena. Si las autoridades de la Parte requerida comunican que la persona ya no debe permanecer detenida, será inmediatamente puesta en libertad y será de aplicación el régimen general establecido en el artículo 15 del presente Convenio.

4. Las autoridades de la Parte requirente deberán devolver a la persona trasladada en el plazo fijado por la Parte requerida, y en todo caso, en el momento en que su presencia en el territorio de la Parte requirente ya no sea necesaria.

Artículo 17

Videokonferência

Las Partes podrán convenir en la obtención de declaración a través de videoconferencia, con arreglo a las condiciones que se especifiquen en cada caso.

Artículo 18

Inmunidad

1. Ningún testigo o perito, sea cual fuere su nacionalidad, que comparezca ante las autoridades judiciales de la Parte requirente como consecuencia de una citación, podrá ser procesado, detenido ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio de dicho Estado por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida.

2. Ninguna persona, sea cual fuere su nacionalidad, que fuere citada antes las autoridades judiciales de la Parte requirente para responder por hechos por los que hubiera sido objeto de actuaciones judiciales, podrá ser procesada, detenida ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio de dicho Estado por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida, y que no constasen en la citación.

3. La inmunidad prevista en el presente artículo cesará en el momento en que la persona, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte requirente, permanezca en él durante 15 días consecutivos desde que su presencia ya no fuera requerida, o regrese a él después de haberlo abandonado.

Artículo 19

Medidas cautelares

1. La autoridad competente de una Parte, por conducto de su Autoridad Central, podrá solicitar la identificación o la adopción de medidas cautelares sobre bienes instrumento o producto, directo o indirecto, de un delito, que se encuentren ubicados en el territorio de la otra Parte.

2. Los productos y otros beneficios obtenidos como producto del delito, los bienes en los cuales el producto del delito se haya transformado, o los bienes con los que se haya confundido, también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma forma y en la misma medida que el producto del delito.

3. La Parte requerida adoptará las medidas cautelares sobre dichos bienes, de conformidad con su ordenamiento jurídico.

4. La Parte requerida resolverá, de conformidad con su ordenamiento jurídico, cualquier solicitud relativa a la protección de derechos de terceros de buena fe sobre los bienes que sean objeto de las medidas previstas en los párrafos anteriores.

5. La autoridad competente de la Parte requerida podrá disponer un plazo razonable que limite la duración de la medida solicitada, según las circunstancias.

Artículo 20

Asistencia para decomiso

1. Las Partes podrán prestarse asistencia en la ejecución de decisiones de decomiso sobre bienes instrumento o producto directo o indirecto del delito, en la medida que los bienes no sean objeto de un procedimiento en la Parte requerida.

2. A petición de la Parte requirente, la Parte requerida podrá transferir a la otra Parte requerida deberá notificar a la Parte requirente el curso dado a la parte la totalidad o parte del instrumento o producto directo o indirecto del delito, en las condiciones que se acuerden.

3. Los bienes decomisados en los términos del presente Convenio, o el producto de los mismos serán destinados por el Estado requerido a reforzar los medios para la lucha contra la criminalidad organizada y para los fondos destinados a la cooperación jurídica o al apoyo a las víctimas del delito.

Artículo 21

Equipo conjunto de investigación

1. Las autoridades competentes de los Estados podrán constituir de común acuerdo un equipo conjunto de investigación para una finalidad concreta y por periodo determinado, para efectuar investigaciones penales en el territorio de uno o de ambos Estados.

2. El equipo conjunto de investigación actuará de conformidad con la legislación del Estado donde discorra la investigación y los miembros del equipo ejecutarán sus actividades en las condiciones establecidas en el acuerdo de constitución del equipo.

3. Durante las actuaciones referidas en este artículo los funcionarios destacados en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo la misión tendrán el mismo tratamiento que los funcionarios de éste, a los efectos de las infracciones de que puedan ser víctimas o que pudieran cometer.

Artículo 22

Intercambio espontáneo de información

1. Las Partes podrán, sin solicitud previa, intercambiarse información relativa a hechos delictivos, cuando consideren que dicha información pudiera ser útil al objeto de iniciar o conducir investigaciones o procesos.

2. La Parte que proporcione la información podrá imponer condiciones acerca del uso que la Parte receptora haga de la misma. Al aceptar dicha información, la Parte receptora se compromete a respetar tales condiciones.

Artículo 23

Traslado de procedimientos penales

1. Las Partes podrán, por medio de sus autoridades centrales, transmitirse denuncias cuyo objeto sea incoar un procedimiento ante las autoridades judiciales de la otra Parte, cuando consideren que dicha Parte se encuentra en mejores condiciones para llevar a cabo la investigación y enjuiciamiento de los hechos.

2. La parte requerida deberá notificar a la Parte requirente el curso dado a la denuncia y remitirá, en su caso, una copia de la decisión adoptada.

Artículo 24

Dispensa de autenticación y legalización

A efectos del presente Convenio, los documentos transmitidos por medio de las autoridades centrales, no requerirán de autenticación, legalización, ni de ninguna otra formalidad análoga.

Artículo 25

Consultas

Las autoridades centrales de ambas Partes podrán celebrar consultas con vistas a promover la aplicación más eficaz del presente Convenio, y acordar las medidas prácticas necesarias para facilitar su aplicación.

Artículo 26

Resolución de controversias

Cualquier controversia que surja entre las Partes, relacionada con la interpretación o aplicación de este Convenio, será resuelta mediante consulta entre las autoridades centrales. En caso de no llegar a un acuerdo, se recurrirá a la vía diplomática.

CAPÍTULO IV

Disposiciones finales

Artículo 27

Compatibilidad con otros instrumentos o formas de cooperación

1. El presente Convenio no impedirá que las Partes se presten asistencia al amparo de lo previsto en otros instrumentos internacionales vigentes entre ellas.

2. Este Convenio no impedirá a las Partes la posibilidad de desarrollar otras formas de cooperación de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Artículo 28

Entrada en vigor

1. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última notificación por vía diplomática en la que se haga constar el cumplimiento de las formalidades constitucionales requeridas en cada uno de los Estados.

Artículo 29

Vigencia y terminación

1. El presente Convenio tendrá una duración indefinida.

2. Cada una de las Partes podrá denunciar el presente Convenio por escrito y por vía diplomática. La denuncia surtirá efectos transcurridos 6 meses desde la fecha de la notificación.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a este efecto por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio.

Hecho en Madrid, el día 20 de marzo de 2007, en dos originales, en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República de Cabo Verde, *José Manuel Gomes Andrade*, Ministro de Justicia.

Por el Reino de España "A.R.", *Mariano Fernández Bermejo*, Ministro de Justicia.

ACORDO DE AUXÍLIO JUDICIÁRIO MÚTUO EM MATÉRIA
PENAL ENTRE A REPÚBLICA DE CABO VERDE
E O REINO DE ESPANHA

A República de Cabo Verde e o Reino de Espanha, adiante denominados ‘Partes’,

Desejando manter e reforçar os laços que unem os dois países;

Conscientes do interesse para as duas Partes em promover uma cooperação mais eficaz na prevenção, investigação e perseguição dos crimes, especialmente no domínio da luta contra o crime organizado e o terrorismo;

Desejando melhorar a coordenação e o auxílio mútuo em matéria penal entre os dois Estados, em conformidade com as suas leis e regulamentos nacionais;

Acordaram o seguinte:

CAPITULO I

Disposições Gerais

Artigo 1

Âmbito de aplicação

1. O presente Acordo tem por objecto o auxílio judiciário mútuo entre as autoridades competentes de ambas as Partes em matéria penal.

2. Em conformidade com as disposições do presente Acordo e em cumprimento dos seus respectivos ordenamentos jurídicos, as Partes comprometem-se, a conceder mutuamente o maior auxílio judiciário possível para a prevenção, investigação e perseguição dos crimes, e em quaisquer actos no âmbito de um procedimentos da ordem jurisdicional penal que sejam da competência das autoridades judiciais da Parte requerente no momento em que o auxílio for solicitado.

3. Pode ser prestado auxílio em conformidade com o presente Acordo em processos por infracções relativas a impostos, direitos alfandegários, controlo de câmbios e outros assuntos fiscais.

4. O presente Acordo não se aplica à:

- a) Detenção de pessoas com fins de extradição, nem aos pedidos de extradição;
- b) Execução de sentenças penais, incluindo a transferência de pessoas condenadas;
- c) Auxílio directo a particulares ou a terceiros Estados.

5. O auxílio judiciário mútuo é prestado ainda que a infracção não seja punível segundo a lei da Parte requerida, com excepção dos casos em que o auxílio é solicitado para a prática de diligências relativas a buscas, embargos e indemnizações, casos em que é necessário que o facto que deu lugar ao pedido seja também crime pela lei da Parte requerida.

6. Para os fins de aplicação do presente Acordo, na determinação do crime, não releva que os elementos constitutivos da infracção sejam diferentemente qualificados pelas leis das duas Partes Contratantes ou que seja utilizada uma terminologia legal diferente.

Artigo 2º

Autoridades Centrais

1. Cada Parte designa uma Autoridade Central encarregada de enviar e receber directamente os pedidos de auxílio, conforme estabelecido no presente Acordo.

2. A Autoridade Central de Espanha é o Ministério de Justiça. A Autoridade Central de Cabo Verde é a Procuradoria-geral da República. Qualquer das Partes pode modificar a designação da Autoridade Central através de comunicação por via diplomática à outra Parte.

3. Para efeitos do presente Acordo, as Autoridades Centrais comunicarão directamente entre si, procurando fazer uso das novas tecnologias, com vista à resolução das questões que surgirem durante a tramitação dos pedidos de auxílio.

4. As Partes, sem prejuízo do disposto no número anterior, podem recorrer à via diplomática para o envio ou recepção de pedidos de auxílio ou de informação relativa à sua execução, quando o considerarem necessário pelas especiais circunstâncias que concorrem no caso.

Artigo 3º

Âmbito do auxílio

O auxílio compreende:

- a) A identificação e localização de pessoas;
- b) A notificação de documentos;
- c) A obtenção de provas, incluindo objectos, documentos ou arquivos;
- d) A execução de mandados de buscas, revistas e apreensões como meios de obtenção de prova;
- e) A audição de testemunhas, peritos e arguidos, directamente ou por meio de videoconferência;
- f) A notificação de testemunhas, peritos e arguidos para, querendo, comparecer a uma diligência processual perante autoridades do Estado requerente;
- g) A transferência provisória de pessoas detidas com objetivo de permitir a prática de diligências processuais pela autoridade do Estado requerente;
- h) A procura, imobilização, perda e apreensão do produto do crime e de outros bens e instrumentos utilizados para a sua prática;
- i) A entrega de bens, incluindo a restituição de objectos e a entrega temporária de meios de prova;
- j) Comunicação de factos que consubstanciam crimes à outra e transferência de processos-crime à outra parte;
- k) A comunicação entre as Partes, sobre antecedentes penais e condenações aplicadas a nacionais da outra parte;
- l) Qualquer outra forma de auxílio conforme aos objectivos do presente Acordo, desde que não seja incompatível com a lei do Estado requerido.

2. O presente Acordo não faculta às autoridades da Parte requerente o desempenho, no território da Parte requerida, de linçõs que, segundo o ordenamento jurídico desta Parte, estejam reservadas às suas próprias autoridades sem prejuízo do disposto no número 2 do artigo 14º e no artigo 21º.

Artigo 4º

Recusa de auxílio

1. O auxílio judiciário é recusado se a Parte requerida considerar que:

- a) O pedido é referente a uma infracção de natureza política ou com ela conexas. Não são consideradas infracções políticas os crimes de terrorismo nem quaisquer outros delitos que a Parte requerida considere excluídos desta categoria em virtude de qualquer Acordo internacional de que seja Parte;
- b) O pedido é referente a crimes considerados pelo Estado requerido como essencialmente militares;
- c) O cumprimento do pedido atenta contra a sua soberania, segurança, ordem pública ou outro interesse essencial;
- d) Existirem fundados motivos para crer que o pedido e auxílio judiciário foi formulado para investigar ou processar uma pessoa em devido à sua raça, religião, nacionalidade, origem étnica, convicções políticas, sexo ou qualquer outra forma de discriminação, ou, que a situação dessa pessoa pode ser agravada por qualquer dessas razões;
- e) No caso de pedidos que impliquem medidas coercivas, que os factos alegados não constituem crime de acordo com a sua legislação;
- f) Se o pedido é referente a um crime punido com pena de morte no território da Parte requerente, prisão perpétua ou pena de privação de liberdade de duração indeterminada.

2. O auxílio é também recusado se:

- a) A infracção foi cometida em qualquer das Partes e, foi instaurado o correspondente processo que terminou com sentença absolutória ou decisão de arquivamento;
- b) A sentença condenatória estiver integralmente cumprida, ou não puder ser cumprida segundo o direito da Parte requerente;
- c) A acção penal estiver extinta por qualquer outro motivo.

3. A Parte requerida pode diferir o auxílio se o cumprimento do pedido causar prejuízo a uma investigação ou processo em curso.

4. Antes de recusar ou diferir o auxílio ao abrigo do presente artigo, a Parte requerida, através da sua Autoridade Central:

- a) Deve informar prontamente a Parte requerente das razões da recusa ou do diferimento do auxílio; ou
- b) Deve consultar, se for caso disso, a Parte requerente a fim de determinar se o auxílio pode ser concedido nos termos e condições que a Parte requerido considere necessários.

5. Se a Parte requerente aceita que o pedido de auxílio seja cumprido nos termos e condições fixadas de acordo com a alínea b) do número anterior deve cumpri-los.

CAPITULO II

Procedimento e execução dos pedidos

Artigo 5º

Autoridades competentes para solicitar auxílio

São consideradas autoridades competentes para emitir pedidos de auxílio, para efeitos do presente Acordo, as autoridades do Estado requerido que, em conformidade com as leis internas, tenham competência para a investigação e julgamento de crimes.

Artigo 6º

Forma dos pedidos

1. Os pedidos de auxílio devem ser formulados por escrito e conter a assinatura da autoridade competente. Em caso de urgência, os pedidos podem ser remetidos por fax, correio electrónico ou por quaisquer outros meios susceptíveis de dar origem a um registo escrito em condições que permitam ao Estado receptor determinar a sua autenticidade, devendo ser confirmados pelo documento original nos 10 dias seguintes à sua formulação.

2. Os pedidos de auxílio, assim como os documentos que os acompanham, devem ser acompanhados de uma tradução na língua do Estado requerido.

Artigo 7º

Conteúdo dos pedidos

1. Os pedidos de auxílio devem conter as seguintes indicações:

- a) Identificação da autoridade que dirige a investigação, diligências ou procedimentos abrangidos pelo pedido;
- b) Descrição do objecto e natureza da investigação, procedimento ou diligências, com menção do crime concreto a que se refere;
- c) Descrição o mais detalhada possível das provas, das informações ou de qualquer outro tipo de auxílio que se solicite;
- d) Declaração da finalidade das provas, das informações ou de qualquer outro tipo de auxílio solicitado, e a sua conexão com os factos objecto de investigação;
- e) Indicação dos textos legais nos quais se fundamenta a investigação ou processo.

2. Os pedidos de auxílio também podem, em função da sua natureza, conter os seguintes elementos:

- a) Informação relativa à identidade e paradeiro da pessoa a que se refere o auxílio solicitado;
- b) Descrição da relação da dita pessoa com a investigação ou o processo, com indicação da forma pela qual deve ser efectuada a notificação ou a tomada de declaração;
- c) Uma lista das perguntas que devem ser formuladas à testemunha ou uma descrição detalhada do assunto sobre o qual ela deve ser interrogada;
- d) Informação relativa às despesas e indemnizações a que tem direito a pessoa que comparecer no Estado requerente;
- e) Descrição precisa do lugar ou da pessoa que devem ser objecto de busca ou revista e dos objectos que devem ser apreendidos, assim como dos bens que devem ser apreendidos ou embargados;
- f) Requisitos sobre confidencialidade do pedido;
- g) Descrição do procedimento especial que a Parte requerente deseja que seja observado para a execução do solicitado;
- h) Indicação das autoridades da Parte requerente que participarão na execução do pedido na Parte requerida;
- i) Prazo em que o pedido deve ser cumprido e razões para urgência quando ocorra;
- j) Qualquer outra informação considerada útil para a execução do pedido de auxílio pela Parte requerida.

Artigo 8º

Execução dos pedidos

1. O pedido de auxílio deve ser enviado directamente à autoridade central da Parte requerida, que o executa de imediato ou transmite sem dilação às autoridades competentes para a sua execução.

2. A autoridade central da Parte requerida deve informar com brevidade possível a Parte requerente de quaisquer circunstâncias que possam causar uma demora considerável na resposta ao pedido.

3. Nos termos previstos no artigo 4º, a parte requerida, deve comunicar com prontidão os motivos do diferimento ou recusa do pedido, assim como as condições em que este pode ser executado.

4. A Parte requeridas na execução do pedido, deve esforçar-se para manter o carácter confidencial, nos termos previstos no artigo seguinte.

Artigo 9º

Confidencialidade e limites no uso da informação

1. Quando solicitado a Parte requerida, deve manter a confidencialidade do pedido, do seu conteúdo e dos documentos que o instruem, bem como da concessão ou recusa desse pedido de auxílio. Se o pedido não puder ser cumprido sem quebra da confidencialidade, a Parte requerida informa a Parte requerente, a qual decide, então, se o pedido deve, mesmo assim, ser executado.

2. A Parte requerente, quando solicitado, mantém a confidencialidade das provas e das informações prestadas pela Parte requerida, salvo na medida em que essas provas e informações sejam necessárias para o processo que determinou o pedido.

3. A Parte requerida pode condicionar o cumprimento do pedido a que a informação ou as provas sejam utilizadas exclusivamente nos termos ou condições especificadas. A Parte requerente não pode usar, sem prévio consentimento da Parte requerida, as provas obtidas ou as informações delas resultantes, para fins diversos dos indicados no pedido.

Artigo 10º

Lei aplicável

1. O pedido de auxílio deve ser cumprido em conformidade com a lei da Parte requerida e com as disposições do presente Acordo.

2. Quando a Parte requerente o solicite expressamente, a parte requerida deve cumprir o pedido em consonância com os procedimentos e formalidades nele indicados, desde que não sejam contrários à sua legislação interna.

Artigo 11º

Informação sobre o estado do pedido

1. A pedido da autoridade central da Parte requerente, a autoridade central da Parte requerida deve informar num prazo razoável, o tratamento dado ao pedido ou o estado em que se encontra a sua execução.

2. A autoridade central da Parte requerida deve informar, com a brevidade possível, o resultado do cumprimento do pedido e remeter toda a informação e provas obtidas à autoridade central da parte requerente.

3. Quando não for possível cumprir o pedido, no todo ou em parte, a autoridade central da Parte requerida deve comunicar o facto, com a brevidade possível, à autoridade central da Parte requerente, com informação das razões.

Artigo 12º

Despesas

1. O Estado requerido suporta as despesas decorrentes do cumprimento do pedido de auxílio, com excepção das seguintes, que ficam a cargo do Estado requerente:

- a) As despesas relacionadas com o transporte de qualquer pessoa, a pedido do Estado requerente, de ou para o território do Estado re-

querido, e quaisquer subsídios ou despesas a que essa pessoa tenha direito durante a sua permanência no Estado requerente derivada do cumprimento de uma solicitação nos termos do presente Acordo;

b) As despesas e os honorários dos peritos ocasionados, quer no território do Estado requerido quer no território do Estado requerente, assim como, as despesas de tradução e despesas extraordinárias decorrentes do emprego de um processo especial solicitado pelo Estado requerente;

2. Se for manifesto que a execução do pedido implica despesas de natureza extraordinária, as Partes Contratantes devem consultar-se para determinar os termos e as condições em que o auxílio pode ser prestado.

CAPITULO III

Formas de auxílio

Artigo 13º

Notificações

1. Se o pedido tiver por objecto a notificação de uma decisão judicial, as autoridades da Parte requerida devem efectuar a notificação na forma prevista pela sua legislação processual.

2. Se o pedido tiver por objecto a entrega de objectos ou documentos, as autoridades da Parte requerida devem proceder à entrega dos mesmos.

3. A notificação deve ser efectuada numa das formas previstas pela lei da Parte requerida, ou na forma solicitada pela Parte requerente, sempre que não seja incompatível com aquela.

4. A entrega deve ser certificada mediante envelope fechado e assinado pelo destinatário, ou mediante certificação da autoridade competente para o efeito. A certificação do cumprimento deve ser enviada à Parte requerente. Se a entrega não puder ser efectuada, fazem-se constar os motivos do impedimento.

Artigo 14º

Comparência na parte requerida

1. Toda pessoa que se encontre no território da Parte requerida e que tenha sido notificada para prestar declarações, apresentar elementos de prova ou realizar uma perícia, deve comparecer perante as autoridades competentes da Parte requerida nos termos da legislação desta. A Parte requerida deve proceder à notificação da pessoa com as cominações previstas na sua legislação.

2. A autoridade competente da Parte requerida autoriza, sob a sua direcção, a presença das autoridades da Parte requerente indicadas no pedido durante a execução de diligências e permite a formulação de perguntas. A audiência deve ter lugar segundo os procedimentos estabelecidos pela legislação da Parte requerida ou na forma especial solicitada pela Parte requerente.

3. Nos termos previstos no número anterior, a Parte requerida deve informar com suficiente antecedência o lugar e a data em que será executado o pedido. Quando necessário, as autoridades competentes devem consultar-se, através das suas Autoridades Centrais, para fixação de uma data conveniente para as autoridades competentes de ambas Partes.

4. Se a pessoa mencionada no número 1 alegar imunidade, privilégio ou incapacidade segundo o ordenamento jurídico da Parte requerida, a autoridade competente da Parte requerida deve decidir antes do cumprimento do pedido, e comunicar a sua decisão à Parte requerente através da Autoridade Central.

5. Se a pessoa mencionada no número 1 alegar imunidade, privilégio ou incapacidade segundo a legislação da Parte requerente, a autoridade competente da Parte requerida deve informar a Parte requerente, por intermédio da Autoridade Central, para que as suas autoridades competentes decidam.

Artigo 15º

Comparência na parte requerente

1. Se as autoridades judiciárias da Parte requerente considerarem necessária a comparência de uma testemunha, perito ou arguido, no seu território para prestar declarações ou fornecer qualquer tipo de informações deve fazer constar do pedido tal facto. As autoridades da Parte requerida devem convidar a pessoa a comparecer no território da Parte requerente, e informar a Parte requerente da sua resposta com a máxima brevidade.

2. O pedido que tiver por objecto a citação de uma testemunha, perito ou arguido perante as autoridades da Parte requerente, deve ser recebido na autoridade central da Parte requerida com antecedência suficiente relativamente à data fixada para a comparência.

3. Os pedidos de notificação referidos neste artigo não podem conter sanções ou cominações; nos casos em que as contenham, não surtirão qualquer efeito em caso de não comparência da testemunha, perito ou arguido.

4. No pedido, as autoridades da Parte requerente devem indicar as despesas de transferência e estadia a seu cargo.

Artigo 16º

Comparência de pessoas detidas perante as autoridades da parte requerente

1. Qualquer pessoa detida na Parte requerida e cuja presença na Parte requerente seja necessária para fins de auxílio nos termos do presente Acordo, pode ser transferida para território da Parte requerente, sempre que, tanto a pessoa em questão, como a Autoridade central da Parte requerida, consintam na transferência. Quando a pessoa detida não der o seu consentimento, não pode ser submetida a qualquer sanção ou cominação.

2. A transferência pode ser recusada quando a presença da pessoa detida é necessária num processo penal em curso no território da Parte requerida, quando a trans-

ferência puder implicar o prolongamento da detenção, ou quando por qualquer outro motivo, a autoridade central da Parte requerida, considerar inconveniente a transferência.

3. As autoridades da Parte requerente devem manter a pessoa transferida sob custódia durante todo o tempo que esta permanecer no seu território. O período de detenção na Parte requerente deve ser tido em conta para efeitos do cômputo da duração da prisão preventiva ou do cumprimento da pena de prisão. Se as autoridades da Parte requerida comunicarem que a pessoa já não deve permanecer detida, ela deve ser imediatamente posta em liberdade aplicando-se o disposto no artigo 15º do presente Acordo.

4. As autoridades da Parte requerente devem entregar a pessoa transferida no prazo fixado pela Parte requerida, ou em qualquer caso, no momento em que a sua presença no território da Parte requerente já não seja necessária.

Artigo 17º

Videokonferência

As Partes poderão acordar na tomada de declarações através de videoconferência, nas condições acordadas em cada caso.

Artigo 18º

Imunidade

1. Nenhuma testemunha ou perito, seja qual for a sua nacionalidade, que compareça perante as autoridades judiciais da Parte requerente em consequência de um pedido, pode ser processada, detida ou submetida a qualquer outra restrição da sua liberdade pessoal no território do referido Estado por factos ou condenações anteriores à sua saída do território a Parte requerida.

2. Nenhuma pessoa, seja qual for a sua nacionalidade, que for citada para comparecer perante as autoridades judiciais da Parte requerente para responder por factos pelos quais foi instaurado processo judicial, pode ser processada, detida ou submetida a qualquer outra restrição da sua liberdade pessoal no território do referido Estado por factos ou condenações anteriores a sua saída do território da Parte requerida que não constam na citação.

3. A imunidade prevista no presente artigo cessa no momento em que a pessoa, tendo tido possibilidade de abandonar o território da Parte requerente, ali permanecer durante 15 dias consecutivos, quando a sua presença já não seja requerida, ou tendo abandonado o referido território a ele regressar.

Artigo 19º

Medidas Cautelares

1. A autoridade competente duma Parte, através da sua Autoridade Central, pode solicitar a identificação ou a adopção de medidas cautelares sobre bens que sejam, instrumentos ou produto, directo ou indirecto, de um crime, que se encontrem no território da outra Parte.

2. As receitas ou outros benefícios obtidos com o produto do crime, os bens nos quais o produto tenha sido transformado ou convertido ou os bens com que tenha sido misturado podem também ser objecto das medidas previstas no presente artigo, da mesma forma e na mesma medida que o produto do crime.

3. A Parte requerida deve aplicar as medidas cautelares solicitadas sobre os bens, em conformidade com o seu ordenamento jurídico.

4. A Parte requerida deve decidir em conformidade com a sua lei qualquer pretensão para a protecção de direitos de terceiros de boa fé que sejam objecto das medidas previstas nos números anteriores.

5. A autoridade competente da Parte requerida pode impôr um prazo razoável que estabeleça os limites de duração da medida solicitada, segundo as circunstâncias do caso.

Artigo 20º

Bens Perdidos

1. As partes podem prestar-se auxílio na execução de decisões relativas à perda de bens que sejam instrumentos ou produtos directos ou indirecto do crime na medida em que não sejam objecto de um processo na parte requerida.

2. Apedido da parte requerente a parte requerida pode transferir para a outra parte a totalidade ou parte de bens que sejam instrumentos ou produtos directos ou indirecto do crime nas condições acordadas no caso.

3. Os bens ou produto dos mesmos declarados perdidos nos termos deste Acordo serão destinados pelo Estado requerido ao reforço de meios para o combate à criminalidade organizada e para fundos de assistência judiciária ou apoio às vítimas de crimes.

Artigo 21º

Equipas de investigação conjuntas

1. As autoridades competentes dos Estados Parte podem criar, de comum acordo, uma equipa de investigação conjunta para um objectivo específico e por um período limitado, para efectuar investigações criminais no território de um de ambos os Estados Parte.

2. A equipa de investigação deve actuar em conformidade com a legislação do Estado parte onde decorre a sua intervenção e os elementos da equipa devem executar as suas missões nas condições estipuladas no acordo que cria a equipa.

3. Durante as operações referidas neste artigo, os funcionários deslocados para o Estado Parte em cujo território se realiza a missão terão o mesmo tratamento que os funcionários deste para efeitos das infracções de que sejam vítimas ou que cometam.

Artigo 22º

Troca espontânea de informação

1. As Partes podem, sem pedido prévio, trocar informações relativa a factos criminosos, quando considerem que a referida informação pode ser útil para iniciar ou instruir investigações ou processos.

2. A Parte que facultar a informação pode impor condições relativas ao uso que a Parte receptora pode fazer da mesma. Ao aceitar a informação, a Parte receptora compromete-se a respeitar as referidas condições.

Artigo 23º

Transferência de procedimentos penais

1. As Partes podem, através das suas Autoridades Centrais, transmitir denúncias a fim de se instaurar procedimento criminal perante as autoridades competentes da outra Parte, quando considerem que esta Parte se encontra em melhores condições para levar a cabo a investigação e julgamento dos factos.

2. A Parte requerida deve notificar a Parte requerente do tratamento dado à denúncia e remeter, quando aplicável, uma cópia da decisão tomada.

Artigo 24º

Dispensa de autenticação e legalização

Para efeitos do presente Acordo, os documentos transmitidos através das Autoridades Centrais, não requerem autenticação, legalização, nem qualquer outra formalidade análoga.

Artigo 25º

Consultas

As Autoridades Centrais de ambas Partes podem realizar consultas com vista a promover a aplicação mais eficaz do presente Acordo, e estabelecer as medidas práticas necessárias para facilitar a sua aplicação.

Artigo 26º

Resolução de controvérsias

Qualquer controvérsia que surja entre as Partes, relacionada com a interpretação ou aplicação deste acordo, deve ser resolvida mediante consulta entre as Autoridades Centrais. Em caso de não chegar a um acordo, deve-se recorrer à via diplomática.

CAPITULO IV

Disposições finais

Artigo 27º

Compatibilidade com outros instrumentos ou formas de cooperação

1. O presente Acordo não impede que as Partes se prestem auxílio ao abrigo de outros instrumentos internacionais de que sejam ou de que venham a fazer parte.

2. O presente Acordo não impede a possibilidade das Partes desenvolverem outras formas de cooperação em conformidade com os seus respectivos ordenamentos jurídicos.

Artigo 28º

Entrada em vigor

O presente Acordo entra em vigor no primeiro dia do segundo mês após a data da última notificação por via diplomática em que uma das partes informa a outra do cumprimento das formalidades constitucionais exigidas pela respectiva ordem jurídica interna.

Artigo 29º

Duração e termo do Acordo

1. O presente Acordo é celebrado por tempo indeterminado.

2. Cada uma das Partes pode denunciar o presente Acordo mediante notificação escrita, por via diplomática. A denúncia terá efeito 6 meses após da data da sua notificação.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados pelos respectivos Governos assinaram o presente Acordo.

Feito em Madrid, no dia 20 Março de 2007, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e espanhola, ambos os textos fazendo igualmente fé.

Pela República de Cabo Verde, *José Manuel Gomas Andrade*, Ministro da Justiça.

Pelo Reino de Espanha, *Mariano Fernández Bermejo*, Ministro da Justiça.

Comissão Permanente

Resolução nº 54/VII/2008

de 14 de Abril

Ao abrigo da alínea *a*) do artigo 55º do Regimento da Assembleia Nacional, a Comissão Permanente delibera o seguinte:

Artigo Único

Deferir o pedido de prorrogação da suspensão temporária de mandato do Deputado Alcindo Francisco Rocha, eleito na lista do MPD pelo Circulo Eleitoral do Porto Novo, até 30 de Setembro de 2008.

Aprovada em 1 de Abril de 2008

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, *Aristides Raimundo Lima*

Secretaria-Geral

Rectificações

Por ter sido publicada de forma inexacta, rectifica-se, na parte que interessa, a Lei nº 23/VII/2008 que aprova o Orçamento da Comissão Nacional de Eleições, *Boletim Oficial* nº 9, I Série, de 3 de Março.

Onde se lê:

Artigo 1º

É aprovado o Orçamento das Comissões de Recenseamento Eleitoral, conforme mapa orçamental anexo ao presente diploma e que dele faz parte integrante.

Deve-se ler:

Artigo 1º

É aprovado o Orçamento da Comissão Nacional de Eleições, conforme mapa orçamental anexo ao presente diploma e que dele faz parte integrante.

Por ter sido publicada de forma inexacta, rectifica-se, na parte que interessa, a Lei nº 24/VII/2008 que aprova o Orçamento das Comissões de Recenseamento Eleitoral, *Boletim Oficial* nº 9, I Série, de 3 de Março.

Onde se lê:

Artigo 1º

É aprovado o Orçamento da Comissão Nacional de Eleições, conforme mapa orçamental anexo ao presente diploma e que dele faz parte integrante.

Deve-se ler:

Artigo 1º

É aprovado o Orçamento das Comissões de Recenseamento Eleitoral, conforme mapa orçamental anexo ao presente diploma e que dele faz parte integrante.

Secretaria-Geral da Assembleia Nacional, na Praia, aos 8 de Abril de 2008. – O Secretário-Geral, *Eutrópio Lima da Cruz*.

—o§o—

CONSELHO DE MINISTROS

Resolução nº 16/2008

de 14 de Abril

As Doenças Não Transmissíveis (DNT) constituem um grupo formado por entidades nosológicas que não são transmitidas por um agente infeccioso nem são causadas por traumatismo e apresentam, geralmente, um longo período de latência, lesões irreversíveis e complicações que acarretam graus variáveis de incapacidade ou óbito dos afectados, bem como graves repercussões sócio económicas em termos de custos, cuidados de saúde e produtividade nacional.

Constituindo as DNT, actualmente, um grande fardo social e económico a nível mundial;

Não estando Cabo Verde a salvo das DNT, as quais constituem um problema de saúde pública e importante causa de sofrimento humano pela elevada morbilidade e mortalidade;

Havendo, por isso, a conveniência na aprovação de um Plano Estratégico de luta contra as DNT;

No uso da faculdade conferida pelo número 2 do artigo 260º da Constituição da República, o Governo aprova a seguinte resolução:

Artigo 1º

Aprovação

É aprovado o Plano Estratégico de Luta Contra as Doenças Não transmissíveis (DNT) cujo texto vem anexo à presente Resolução e que dela faz parte integrante.

Artigo 2º

Entrada em vigor

A presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Vista e aprovada em Conselho de Ministros

José Maria Pereira Neves

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, *José Maria Pereira Neves*

PLANO ESTRATÉGICO DE LUTA CONTRA AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

DEZEMBRO 2007

Recursos e financiamento do plano
Plano de seguimento e avaliação

I - INTRODUÇÃO

Trata-se do Plano Estratégico de luta contra as doenças não transmissíveis para os anos de 2008 a 2010.

As Doenças não transmissíveis (DNT) constituem um grupo formado por entidades nosológicas que não são transmitidas por um agente infeccioso nem são causadas por traumatismo e apresentam geralmente um longo período de latência, lesões irreversíveis e complicações que acarretam graus variáveis de incapacidade ou óbito dos acometidos bem como graves repercussões sócio económicas em termos de custos, cuidados de saúde e produtividade nacional.

As DNT consideradas no passado afecções próprias dos países desenvolvidos tendo sido por isso “negligenciadas” no nosso continente, constituem actualmente um grande fardo social e económico a nível mundial. A HTA que é o principal factor de risco das DNT atinge cerca de 20 milhões de pessoas em Africa e a prevalência da Diabetes estimada entre 1 a 5 %, continua a aumentar segundo os dados da OMS, podendo em 2025 atingir os 300 milhões. Segundo a mesma fonte, 75% desses diabéticos serão oriundos do terceiro mundo.

Cabo Verde não foge à regra e as DNT constituem um problema de saúde pública, representando causa importante de sofrimento humano pela elevada morbilidade e mortalidade. Actualmente as DNT contribuem com mais de 50% da mortalidade geral do país.

No presente Plano Estratégico serão abordadas as questões relativas à organização da luta contra as doenças cardiovasculares, a diabetes e os cancros. Estamos

conscientes da importância de outras doenças e estados não transmissíveis, nomeadamente, asma brônquica, cegueira, alcoolismo e outras doenças mentais, que não serão abordadas neste plano visto serem objecto de programas específicos. No entanto mecanismos de articulação e integração entre os diferentes programas de saúde terão que ser tidos em conta de forma a permitir criar as sinergias necessárias para uma efectiva implementação das actividades de luta contra o conjunto das doenças não transmissíveis.

Para a elaboração deste programa foi constituído por Sua Excelência o Ministro da Saúde um grupo de trabalho pluridisciplinar que abordou as seguintes questões: objectivo geral, objectivos específicos, estratégias, principais intervenções a serem implementadas, resultados e metas, orçamentação e plano de seguimento e avaliação.

Para a implementação deste Plano Estratégico o Ministério da Saúde espera poder contar com os apoios técnicos e financeiros dos seus habituais parceiros, em particular a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial, o Sistema das Nações Unidas, assim como os parceiros da cooperação bilateral tais como Portugal, Luxemburgo, Espanha, Cuba

II - DADOS GERAIS SOBRE O PAÍS

Situado na costa oeste Africana, a cerca de 455Km do Senegal, o arquipélago de Cabo Verde é formado por dez ilhas de origem vulcânica, sendo nove habitadas. A superfície é de 4.033 Km².

O arquipélago está dividido nos grupos de Barlavento e Sotavento de acordo com os ventos dominantes. Administrativamente está dividido em 22 concelhos.

Em 2000, a população foi estimada em 434.626 habitantes, sendo 210.234 homens e 224.392 mulheres, maioritariamente jovem, forte concentração urbana (53,7%), densidade populacional de 111 habitantes por Km², com extremos que atingem 410 habitantes por Km² no concelho da Praia e 6,8 habitantes por Km² na ilha da Boa Vista.

O fenómeno migratório é muito antigo, representando um elemento inerente ao processo de formação da própria sociedade cabo-verdiana. Além da forte componente internacional, exprime-se também entre as ilhas e no seu interior, sobretudo em direcção aos centros urbanos, com especial destaque para a sua capital Praia. (1)

A população cabo-verdiana está em transição demográfica desde 1980. O índice sintético de fecundidade passou de 7,1 filhos/mulher em (1979-80) para 4 filhos/mulher em 2000; a taxa bruta de mortalidade passou de 11/1000 em 1960 para 8/1000 na década de 80 e para 5,6/1000 em 2000; a mortalidade infantil baixou de 49/1000 (1992-95) para 32,5 /1000 (1996-2000). A esperança de vida à nascença aumentou de 53,8 anos em 1970 para 68,4 anos em 1990 e 71 anos em 2000, sendo, nesse último ano, de 67 anos para os homens e 75 anos para as mulheres. (3)

A população é estruturalmente jovem, tendo 42,3% uma idade inferior a 15 anos e 33% na faixa etária dos 15-30 anos (em 2000). No mesmo período, o grupo etário com mais de 70 anos constituía 4,2 % da população. (3)

A economia cabo-verdiana teve um forte crescimento na década de 90 com uma taxa média anual, em termos reais, de 6,1% e de 5% entre 2000 e 2003. O PIB per capita passou de 902 dólares US em 1990 para 1420 em 2002.

Apesar dos avanços em matéria de desenvolvimento humano e de crescimento económico, Cabo Verde continua um país vulnerável tanto pela fraqueza e instabilidade da sua pluvimetria como pela dependência da ajuda pública ao desenvolvimento. (3)

Apesar das melhorias significativas que se vêm registando de ano para ano, a grande parte da população vive em condições sócio económicas desfavoráveis. O índice de pobreza é ainda elevado, estimado em 37% (2002), 55% no meio rural e 45% no meio urbano. (3)

A descontinuidade territorial associada a uma grande dispersão da população constitui um sério constrangimento para a implementação dos programas de desenvolvimento, pois obriga o país a criar múltiplas infra-estruturas aumentando os custos da prestação de serviços sociais, sanitários e outros e levantando problemas quanto ao objectivo de desenvolvimento humano equitativo.

III - SERVIÇO NACIONAL DE SAUDE

Política de Saúde

A política nacional de saúde em Cabo Verde está assente nos princípios básicos da equidade da prestação dos cuidados de saúde, no acesso universal aos serviços, na priorização das zonas menos favorecidas geográfica e socialmente e, ainda, na coordenação entre as estratégias de saúde com as dos sectores afins, tendo em conta a interdependência dos níveis de saúde com o desenvolvimento de outros sectores sociais, económicos e culturais.

O Ministério da Saúde é o departamento governamental responsável pela definição e execução da política nacional da saúde. Como indica o organograma em anexo, o Ministério da Saúde dispõe de serviços centrais, com diferentes funções de administração da saúde e uma rede pública de serviços de saúde.

Financiamento da saúde

O Estado é o principal financiador da saúde. O esforço público de financiamento da saúde é importante como testemunha a parte das despesas públicas no Orçamento do Estado, representando cerca de 11% (incluindo as despesas com a saúde do INPS). A parte das despesas públicas na saúde representa 82% do total, correspondendo a 3,7% do PIB (2002). (3)

Constata-se, contudo, nos últimos anos, uma tendência para a estagnação, enquanto que a população cresce, em média, de 2,4 % por ano. O esforço público deverá manter-se proporcional ao crescimento económico e também ao crescimento da população bem como as tendências epidemiológicas

Cabo Verde dispunha, em 2003, de um PIB por habitante de 1.764 dólares e no período 2005-2008 prevê-se que o

crescimento económico anual, em média, atinja 6,7%. O montante das despesas totais de saúde per capita ronda 70 dólares. Com este nível de despesa, o país pode fornecer, com carácter universal, um pacote de cuidados primários essenciais.

Organização do serviço de saúde

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é constituído por todas as entidades públicas ou privadas que desenvolvem actividades de promoção, protecção, prevenção e tratamento na área da saúde. São, ainda, parte integrante do SNS, as instituições públicas e privadas de controlo de qualidade, pesquisa, importação, produção e comercialização de medicamento e outros produtos utilizados na prestação de cuidados de saúde.

O Sector Público de Saúde é o conjunto de instituições e serviços públicos de prestação de cuidados de saúde dependentes do membro do governo responsável pela pasta da saúde, incluindo todas as unidades públicas de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em matéria de saúde. Ao Estado compete assegurar a existência e o regular funcionamento do Sector Público de Saúde.

A lei veda a transferência de encargos do sector privado de saúde para o público e reconhece a complementaridade entre os mesmos.

Para o acompanhamento do SNS, encontra-se estabelecido um conjunto de órgãos, que têm como finalidade assegurar o direito de participação dos cidadãos de forma organizada e sistemática, nomeadamente o Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Consultivos das Regiões Sanitárias e as Comissões Municipais de Saúde.

Em termos de organização o sector público de saúde tem uma administração central e uma estrutura descentralizada. É constituído pelo conjunto articulado e desconcentrado de órgãos, serviços e estabelecimentos de saúde centrais, regionais, concelhios e locais.

O Serviço Público de Saúde (SPS) integra na sua composição uma rede hierarquizada de estabelecimentos públicos, e tem como base os cuidados primários de saúde.

Em 2006 os cuidados de saúde dispensados pelo SPS foram assegurados por dois Hospitais Centrais, três Hospitais Regionais, vinte Centros de Saúde, trinta e três Postos Sanitários, cento e doze Unidades Sanitárias de Base, cinco Centros de Saúde Reprodutiva, um Centro de Saúde Mental e um Centro de Terapia Ocupacional.

O país dispõe, ainda, de 16 postos de venda de medicamentos e 26 farmácias privadas. Contudo, o número de farmácias é considerado insuficiente e com uma distribuição irregular no território. Enquanto que a cidade da Praia conta com 11 e Mindelo com 06 existem ilhas que não dispõem de nenhuma, para além do serviço de farmácia existente no seio das delegacias de saúde. A tendência será de transformar os postos de venda de medicamento em farmácia.

Em 2006 estiveram a prestar cuidados de saúde, nos diferentes concelhos, 217 médicos (4.5/10.000 hab.) e 471 enfermeiros (9.3/10.000 hab.), num total de cerca de 1.700 trabalhadores.

O Sector Privado de Saúde encontrou o suporte legal a partir da publicação da Lei de Bases de Saúde 62/III/89, que reconheceu o exercício da actividade privada e cooperativa nas diversas áreas da prestação dos cuidados de saúde.

Este sector vem ganhando espaço em Cabo Verde, embora ainda tenha uma expressão bastante limitada. De um modo geral, são consultórios médicos e de estomatologia instalados, sobretudo, no meio urbano, com uma intervenção que, em regra, se resume a área curativa.

IV - A SITUAÇÃO ACTUAL DAS DOENÇAS CRÓNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Situação no mundo

As doenças crónicas não transmissíveis (DNT) vêm aumentando de forma acelerada no mundo, sem distinção de países nem de nível económico e, devido às suas graves implicações para a sociedade e para os recursos dos sistemas de saúde, representam um sério desafio no tocante a efectividade e eficiência dos mesmos.

Dados da OMS mostram que as DNT e as doenças mentais representam 59% do total de óbitos ocorridos no mundo e as projecções para 2020 mostram que as DNT e os acidentes serão responsáveis por 78% da carga global de doença nos países em vias de desenvolvimento.

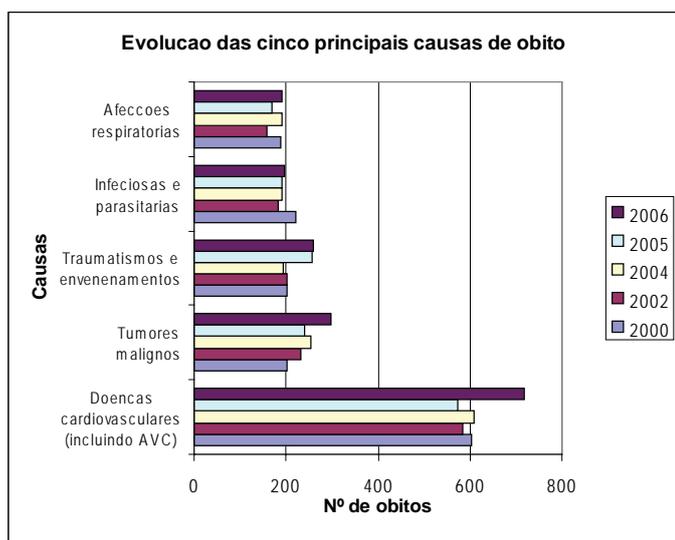
Esta demonstrado que, uma efectiva aposta na prevenção, detecção e redução dos factores de risco que são comuns a varias condições e muitas vezes estão associados, leva ao declínio de todas as doenças decorrentes. O problema situa-se, no entanto, a nível dos factores sociais, culturais e económicos fortemente enraizados no estilo de vida das pessoas e por isso são difíceis de ultrapassar.

Tendo em conta as graves implicações para a sociedade e serviço de saúde que estas doenças acarretam, justifica-se a elaboração e implementação de uma estratégia nacional abrangente e integrada de luta, que potencie a redução dos riscos de contrair essas doenças e permita tratá-las de forma adequada

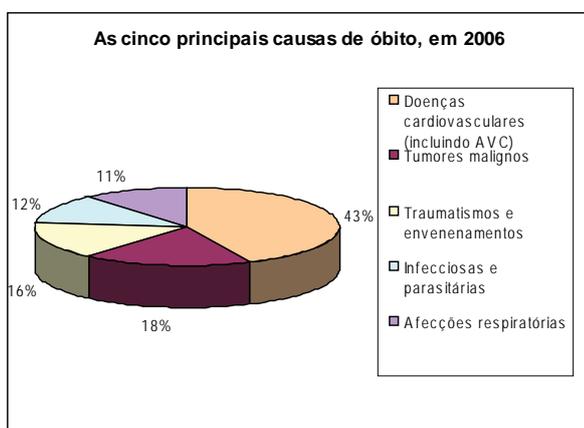
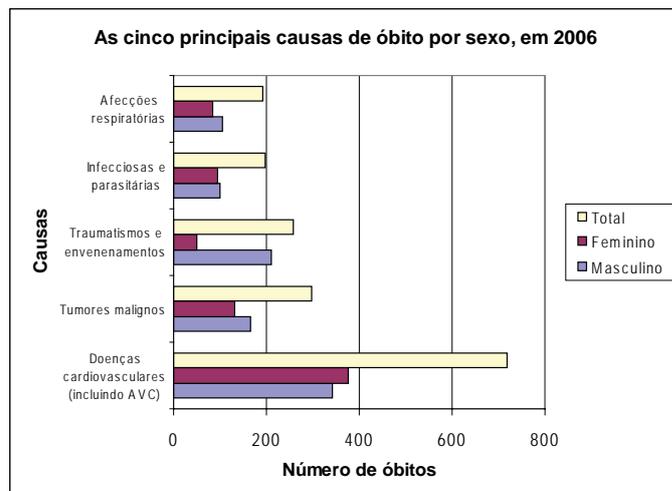
Em Cabo Verde

Análise epidemiológica

Embora não podendo basear nos dados do registo das consultas e internamentos que são geralmente deficientes, temos a percepção de que a demanda de consultas por doenças crónicas vem aumentando de forma acelerada. Por outro lado, a análise da evolução dos óbitos nos últimos 10 anos permite-nos afirmar que o país esta em plena transição epidemiológica e que as doenças cardiovasculares, e o cancro constituem actualmente as principais causas de morte no nosso país, o que obriga a que se tenha uma especial atenção à sua efectiva prevenção, detecção, tratamento e reabilitação.



A causa “Traumatismos e envenenamentos”, como se pode constatar pelo gráfico, representa uma parte muito importante dos óbitos. Deverá ser analisada em trabalho independente uma vez que está fora do âmbito das DCNT.



Análise dos factores de risco modificáveis

São os factores sobre os quais se pode agir com o objectivo de reduzir a incidência de doenças crónicas:

Tabagismo

– Principal causa de morte evitável nalguns países desenvolvidos. Os efeitos nocivos do tabaco são cumulativos tanto em relação ao seu consumo diário como ao tempo de exposição. Faz aumentar consideravelmente o risco de desenvolver todas as formas de doenças cardiovasculares, osteoporose doenças respiratórias e oncológicas. O risco é maior nas mulheres pois reduz de forma significativa a protecção conferida pelos estrogénios. Por outro lado sabe-se que o ex-fumador sem DC tem um risco de ocorrência de acidentes coronários, ao fim de 10 anos de ter cessado de fumar, semelhante ao de um não fumador. Em Cabo Verde, os resultados do IDSR-II (2005) mostram que cerca de 12,7% dos homens dos 15-59 anos e 2,4% das mulheres dos 15-49 anos fumam tabaco.

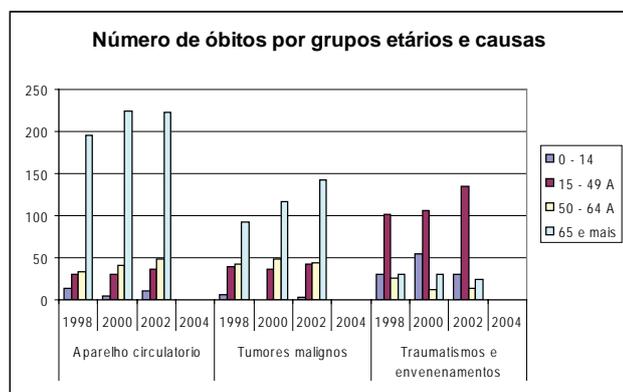
Excesso de peso/obesidade

– IMC entre 25 a 29.9 ou ≥ 30 para a obesidade em pessoas com a idade compreendida entre 18-64 anos. O excesso de peso pode influenciar o aparecimento de uma HTA e Diabetes, afecções que por sua vez são importantes factores de risco para doenças cardiovasculares. A análise da situação nutricional realizada em Maio 2004 após inquérito feito pelo INE revela os seguintes dados: prevalência de sobrepeso de 24% e obesidade de 7% nos meios urbanos (com especial incidência na Praia Urbana; nos executivos e técnicos superiores a taxa é de 35% seguido das forças armadas; 15% nos indivíduos com a idade compreendida entre ao 50 e 60 anos.

Sedentarismo

– O tipo de vida e o desenvolvimento económico e social, levaram a uma redução da actividade física. Aumentar a actividade física regular na população nos diferentes grupos etários, permite reduzir o peso melhorar as taxas de colesterol, a TA, e a Diabetes reduzindo assim o risco global de doenças cardiovasculares.

A distribuição por grupos etários indica um número crescente de óbitos de pessoas com idade inferior a 50 anos por doenças do aparelho circulatório e tumores malignos, representando em média, respectivamente, 14% e 21% do total dos óbitos por essas causas. No tocante aos traumatismos e envenenamentos, as crianças com idade inferior a 15 anos e os jovens e adultos dos 15 aos 50 anos representam em média 77% dos óbitos, o que constitui uma situação deveras preocupante tanto em termos de saúde pública, como do seu impacto económico pela perda de vidas jovens e em idade activa e pela incapacidade causada por essas situações.



Pode ainda constatar-se que as doenças cardiovasculares, como causa de mortalidade, têm um peso praticamente igual nos homens e mulheres no país enquanto com as neoplasias há um ligeiro predomínio no sexo feminino.

Diabetes Mellitus

– A diabetes mellitus constitui um dos grandes problemas de saúde no país. De facto é a principal causa de amputação não traumática de membros inferiores, a terceira causa de cegueira adquirida, uma das principais causas de insuficiência renal crónica, um dos factores de risco major para as doenças cardiovasculares e causa importante de internamentos por descompensação aguda

Hipertensão Arterial

– É simultaneamente uma doença cardiovascular e um factor de risco major para as coronariopatias, AVC, as arteriopatias periféricas, a insuficiência cardíaca e a insuficiência renal crónica. A HTA faz aumentar em 2 a 3 vezes o risco de aparecimento de uma doença cardiovascular.

Dislipidemia

– A relação entre as dislipidemias, as várias manifestações clínicas da aterosclerose esta cientificamente provada, bem como o seu agravamento pela associação com o tabagismo, a Diabetes Mellitus e/ou HTA.

Alcoolismo

– Para além de ser um factor de risco para várias doenças crónicas, constitui um drama para a sociedade Cabo-verdiana como se pode constatar pelos dados indirectos – Mortes violentas no trânsito e as causadas por agressões, intoxicações, incapacidade para o trabalho. Dados do Inquérito as Despesas Familiares realizadas pelo INE em 2001/02 mostram que em Cabo Verde, as famílias reservam o mesmo percentual do seu orçamento tanto para o consumo de bebidas alcoólicas como para as despesas de saúde. Entretanto comparativamente com as despesas da educação, a parte do orçamento que se dedica as bebidas alcoólicas é mais do que o dobro.

Impacte socio-económico das DNT

Não obstante a falta de dados fiáveis sobre a morbidade por doenças não transmissíveis e crónicas, constata-se, contudo, que estas constituem as principais causas de evacuações sanitárias para o exterior. No compute geral (OGE e INPS), as evacuações sanitárias custam anualmente mais de 200.000 contos, o que representa cerca de 10% das despesas de funcionamento do Ministério da Saúde.

O número das evacuações aumentou muito nos últimos anos, apesar da tendência recente de estabilização, situando-se acima de 200 casos por ano. Estima-se que o custo unitário das evacuações varie entre 0,5 a 1,5 mil contos, dependendo, principalmente, da causa da evacuação e da necessidade ou não de acompanhante¹.

Em mais da metade, as causas das evacuações prendem-se com casos de tumores malignos e doenças cardiovasculares. Acrescente-se o peso dos doentes hemodialisados, com uma evacuação por tempo indeterminado, e da traumatologia e outras causas.

Não se dispõe de dados conclusivos sobre o impacte das DNT na pobreza. Contudo, mais de metade dos doentes evacuados constituem pessoas vulneráveis, a cargo da Direcção Geral da Solidariedade Social. Pode-se inferir, que as doenças não transmissíveis têm um peso importante na saúde dos pobres. A agravar a situação de doença e os custos com isso relacionados, os vulneráveis não dispõem de uma segurança social que lhes confira um subsídio de doença para a sua subsistência e da família.

Tão-pouco se dispõe de dados globais sobre o impacte económico das DNT. No entanto, constata-se que as despesas com as evacuações de doentes já assumem um peso importante no orçamento do Ministério da Saúde e do INPS, acrescidas dos custos com a assistência médica e medicamentosa dos doentes no exterior e dos encargos directos com a saúde por parte das famílias. Uma análise do seu impacto deverá, ainda, ter em conta os custos indirectos relacionados com a incapacitação e a mortalidade precoce, bem assim como os custos sociais advenientes, nomeadamente da protecção da orfandade e da subsistência das famílias.

Capacidade resposta

O país vem desenvolvendo medidas de politica no sentido do reforço das intervenções no ambito da prevenção das DCNT nomeadamente:

Educação

No quadro do sistema educativo, para alem do Programa de Saúde Escolar em implementação destaca-se:

- No ensino primário são abordados temas curriculares versando sobre a saúde (alimentação saudável, a higiene oral e o combate ao uso de drogas ilícitas entre outros).
- No ensino secundário estes temas estão inseridos nas disciplinas de Formação Pessoal e Social e de Homem e Ambiente.

No campo jurídico

- A Lei n.º 119/IV/95, *Boletim Oficial* n.º 8, de 13/03/95 “Define as condições de dissuasão e restrição do uso do tabaco”.
- A Resolução n.º 142/VI/2005, *Boletim Oficial* n.º 35, de 29/08/05 “Aprova a ratificação a Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco”.
- A lei n.º 27/IV/97, *Boletim Oficial* n.º 24, de 23/06/97 “Interdita a venda de bebidas alcoólicas a menores e interdita a publicidade de bebidas alcoólicas em algumas situações.

¹ Etude sur le financement de la santé, 2003, P. Vinard

Na área da Saúde

– Orientações estratégicas inscritas na Política Nacional de Saúde

– Um plano preliminar de acção contra o alcoolismo elaborado pelo Ministério da Saúde em 2005 (aguarda implementação).

– Um plano nacional de Nutrição elaborado em 1996.

– Um plano para a despistagem e tratamento das doenças oncológicas em implementação.

– Acções de sensibilização contra o uso de tabaco desenvolvidas;

– Consultas de doenças cardiovasculares e diabetes nos Hospitais Centrais e Delegacia de Saúde.

Embora as estruturas de saúde do país estejam implicadas na resolução do problema, não estão adaptadas para o atendimento das doenças crónicas não transmissíveis. Destacam-se as seguintes carências:

- Técnicos em numero insuficiente e sem capacitação adequada/falta de equipamentos, materiais e consumíveis.
- Inexistência de protocolos de diagnóstico e tratamento das principais DCNT
- Distribuição irregular da rede de estruturas de saúde/lacunas na cobertura.
- Vertente preventiva das DCNT praticamente inexistente.
- Deficiente organização de registos para o seguimento e monitorização do doente.

Conclusão

Em Cabo Verde, com o aumento da esperança de vida, a população com idade superior aos 60 anos passou para cerca de 10% dos efectivos. A pirâmide etária modificou-se progressivamente e, apesar da base ser, ainda, larga, o «tronco» está a alargar-se sensivelmente. A natalidade, embora a tendência a médio prazo, para a diminuição, é ainda considerável, com um índice de fecundidade de 2,9 (IDR II 2005). Os dados disponíveis apontam que o envelhecimento da população vai, provavelmente, acelerar.

A população idosa absorverá cada vez mais uma parte importante dos recursos de saúde pois o peso crescente das doenças cardiovasculares, dos tumores malignos e dos traumatismos e envenenamentos tenderá a agravar-se.

Face à situação de transição epidemiológica já bem avançada, o sistema de saúde deverá adaptar-se para dar respostas a uma crescente demanda de cuidados especializados.

Para além disso, a estratégia de luta contra as doenças não-transmissíveis incluirá acções e medidas de prevenção, nos domínios da nutrição, da luta contra o tabagismo e o alcoolismo e protecção do meio ambiente e de diagnóstico precoce que são de baixo custo e com eficácia demonstrada.

Também, o desenvolvimento de serviços de proximidade de qualidade para algumas doenças crónicas (hipertensão arterial, diabetes...), terá um impacte importante na população melhorando a qualidade do atendimento e a eficácia das intervenções. Nesse domínio, o sector privado, a sociedade civil, a Cruz Vermelha e outras ONGs poderão desempenhar um papel cada vez mais importante.

De outro modo o peso das doenças crónicas não transmissíveis será tal que poderá ter uma incidência insustentável nos recursos económicos do país para além da carga de sofrimento físico e psicológico dos afectados e seus familiares.

V - OBJECTIVOS

V.1. OBJECTIVO GERAL

Reduzir a morbilidade e a mortalidade decorrente das doenças crónicas não transmissíveis em Cabo Verde.

V.2. OBJECTIVOS ESPECIFICOS

- Conhecer o impacte das DNT e principais factores de risco no nosso país
- Promover a educação para a saúde
- Reduzir a prevalência dos factores de risco na população (obesidade, tabagismo, dislipidemia, HTA e diabetes)
- Aumentar a proporção das DNT diagnosticadas precocemente e controladas.
- Capacitar médicos e enfermeiros no atendimento e seguimento dos doentes DNT
- Reduzir as complicações das DNT
- Promover e apoiar a intervenção da comunidade
- Promover a pesquisa

VI – ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Assentam sobretudo na prevenção primária e secundária das DNT através da complementaridade entre acções populacionais e acções individuais. As acções populacionais compreendem o conjunto de medidas destinadas à população em geral ou a grupos específicos, começando pela educação para a saúde e pela comunicação social, tendo como objectivo diminuir a prevalência de factores de risco. As acções individuais compreendem as especificamente dirigidas a pessoas identificadas como portadoras de factores de risco ou DNT no próprio ou na família, e as acções de natureza informativa formativa e normalizadores, dirigidas aos profissionais de saúde.

Associada à prevenção primária e secundária, a prevenção terciária, a reabilitação e a reintegração social impõem uma reorganização dos hospitais centrais no sentido de melhorar a capacidade de resposta a esses novos desafios mediante acções custo /eficácia comprovadas

VI.1. Doenças cardiovasculares

– Realização de inquérito para identificar e quantificar os factores de risco das doenças cardiovasculares na população em geral.

– Intensificar as campanhas de informação dirigidas à população em geral, sobre os factores de risco e estilos de vida saudáveis

– Redução do número de pessoas com excesso de peso, prevenção e controlo do tabagismo e aumento da prática regular da actividade física.

– Aumento do número de HTA e dislipidemicos diagnosticados e tratados precocemente.

– Formação/capacitação de médicos e enfermeiros dos Hospitais Centrais, Hospitais Regionais e Centros de Saúde com base em protocolos elaborados.

– Tratamento e monitorização adequados dos doentes a fim de retardar ou evitar o aparecimento de complicações.

– Tratamento das complicações de forma atempada e adequada a fim de permitir uma rápida recuperação e a reintegração social e profissional.

– Formação e apoio na aquisição de materiais para as ONGs e líderes comunitários para actividades de informação/educação e apoio aos doentes.

– Organização da colecta de dados e realização de estudos visando a produção de informação estratégica.

VI.2. Diabetes Mellitus

– Realização de inquérito para identificar e quantificar os factores de risco da diabetes na população em geral.

– Intensificar as campanhas de informação dirigidas à população em geral, sobre os factores de risco e estilos de vida saudáveis

– Redução do número de pessoas com excesso de peso e aumento da prática regular da actividade física.

– Aumento do número de diabéticos diagnosticados e tratados precocemente.

– Formação/capacitação de médicos e enfermeiros dos Hospitais Centrais, Hospitais Regionais e Centros de Saúde com base em protocolos elaborados.

– Tratamento e monitorização adequados dos doentes a fim de retardar ou evitar o aparecimento de complicações, nomeadamente cegueira, doença coronária, insuficiência renal crónica, pé diabético/amputações.

– Formação e apoio na aquisição de materiais para as ONGs e líderes comunitários para actividades de informação/educação e apoio aos doentes.

– Organização da colecta de dados e realização de estudos visando a produção de informação estratégica.

VI.3. Tumores Malignos

– Realização de inquérito para identificar e quantificar os factores de risco dos cancros do aparelho digestivo, ginecológico, mama e prostata.

– Intensificar as campanhas de informação dirigidas à população em geral, sobre os factores de risco e estilos de vida saudáveis

– Prevenção e controlo do tabagismo, excesso de peso, “infecções sexualmente transmitidas”

– Aumento do número de cancros diagnosticados e tratados precocemente.

– Formação/capacitação de médicos e enfermeiros dos Hospitais Centrais, Hospitais Regionais e Centros de Saúde com base em protocolos elaborados.

– Formação e apoio na aquisição de materiais para as ONGs e líderes comunitários para actividades de informação/educação e apoio aos doentes.

– Organização da colecta de dados e realização de estudos visando a produção de informação estratégica.

PLANO DE ACÇÃO 2008-2010 (revisão e reajustamento anuais)

Domínio de intervenção: Doenças cardiovasculares

Objectivo específico	Estratégias	Actividades	Calendário	Custo (em 1000 ecv)	Responsável
Conhecer o impacto das DNT e principais factores de risco no nosso país	Realização de inquéritos para identificar e quantificar os factores de risco das doenças cardiovasculares na população em geral.	Concluir o inquérito IDNT e divulgar os resultados Realizar novo inquérito para seguimento do impacto das intervenções de luta contra as DNT	I/2008 IV/2010		MS/PLDNT MS/PLDNT
Promover a educação para a saúde	Intensificar as campanhas de informação dirigidas à população em geral, sobre os factores de risco e estilos de vida saudáveis	Capacitar o pessoal de saúde em IEC/DNT Elaborar e difundir mensagens educativas durante os atendimentos nas estruturas de saúde Elaborar e difundir programas educativos nos meios de comunicação social Implementar a política nacional de nutrição	III/2008 III/2008 I/2008 I/2009		MS/CNDS MS/CNDS MS/CNDS MS/PNN
Reduzir a prevalência dos factores de risco na população	Redução do número de pessoas com excesso de peso, prevenção e controlo do tabagismo e aumento da prática regular da actividade física	Implementar consultas de nutrição em todos os Centros de Saúde Implementar as leis de restrição de uso do tabaco em locais públicos Elaborar orientações técnicas sobre conteúdos programáticos a utilizar na formação de profissionais de saúde sobre a desabituacão tabágica. Produzir orientações técnicas sobre aconselhamento e acompanhamento de fumadores em medicina geral Produzir orientações técnicas sobre os benefícios da actividade física. Implementar consultas de nutrição nos Centros de saúde	IV/2009 II/2008 I/2009 I/2009 III/2008		MS/DS MS/ADM MS/PNLDNT MS/PNLDNT MS/PNLDNT
Aumentar a proporção de DNT diagnosticadas precocemente e controladas	Aumento do número de HTA e dislipidémicos diagnosticados e tratados precocemente.	Elaborar e implementar protocolos de rastreio, diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares Fornecer os Centros de Saúde em materiais, reagentes e medicamentos para diagnóstico e tratamento	I/2008 IV/2008		MS/PNDNT MS/DS/H MS/DGF

Capacitar médicos e enfermeiros no atendimento e seguimento dos doentes com DNT	Formação/capacitação de médicos e enfermeiros dos Hospitais Centrais, Hospitais Regionais e Centros de Saúde com base em protocolos elaborados	Formar médicos e enfermeiros com base nos protocolos elaborados	III/2008		MS/DS/H
Reduzir as complicações das DNT	Tratamento e monitorização adequados dos doentes a fim de retardar ou evitar o aparecimento de complicações. Tratamento das complicações de forma atempada e adequada a fim de permitir uma rápida recuperação e a reintegração social e profissional.	Supervisionar a aplicação dos protocolos Equipar e fornecer materiais, reagentes e medicamentos aos hospitais para o diagnóstico e tratamento das complicações	I/2009; I/2010 II/2008		MS/PNLDNT MS/DGF
Promover e apoiar a intervenção da comunidade	Formação e apoio na aquisição de materiais para as ONGs e líderes comunitários para actividades de informação/educação e apoio aos doentes.	Determinar áreas de intervenção Formar membros das ONGs Fornecer materiais educativos e outros	I/2008 IV/2008 IV/2008		MS/PNDNT MS/CNDS MS/CNDS
Promover a pesquisa	Organização da colecta de dados e realização de estudos visando a produção de informação estratégica.	Criar um registo nacional das doenças cardiovasculares Criar uma base de dados sobre a nutrição	II/2008 III/2008		MS/DGS/GEP MS/DGS/GEP

PLANO DE ACÇÃO 2008-2010

Domínio de intervenção: Diabetes mellitus

Objectivo específico	Estratégias	Actividades	Calendário	Custo	Responsável
Conhecer o impacto das DNT e principais factores de risco no nosso país	Realização de inquéritos para identificar e quantificar os factores de risco da diabetes na população em geral.	Concluir o inquérito IDNT e divulgar os resultados Realizar novo inquérito para seguimento do impacto das intervenções de luta contra as DNT	I/2008 IV/2010		MS/PLDNT MS/PLDNT
Promover a educação para a saúde	Intensificar as campanhas de informação dirigidas à população em geral, sobre os factores de risco e estilos de vida saudáveis	Capacitar o pessoal de saúde em IEC/DNT Elaborar e difundir mensagens educativas durante os atendimentos nas estruturas de saúde Elaborar e difundir programas educativos nos meios de comunicação social Implementar a política nacional de nutrição	III/2008 III/2008 I/2008 I/2009		MS/CNDS MS/CNDS MS/CNDS MS/PNN

Reduzir a prevalência dos factores de risco na população	Redução do número de pessoas com excesso de peso e aumento da prática regular da actividade física	Implementar consultas de nutrição em todos os Centros de Saúde Produzir orientações técnicas sobre os benefícios da actividade física.	IV/2009 III/2008	MS/DGF MS/PLDNT
Aumentar a proporção de DNT diagnosticadas precocemente e controladas	Aumento do número de diabéticos diagnosticados e tratados precocemente.	Elaborar e implementar protocolos de rastreio, diagnóstico e tratamento da diabetes Fornecer os Centros de Saúde em materiais, reagentes e medicamentos para diagnóstico e tratamento	I/2008 IV/2008	MS/PNDNT MS/DS/H MS/DGF
Capacitar médicos e enfermeiros no atendimento e seguimento dos doentes com DNT	Formação/capacitação de médicos e enfermeiros dos Hospitais Centrais, Hospitais Regionais e Centros de Saúde com base em protocolos elaborados	Formar médicos e enfermeiros com base nos protocolos elaborados	III/2008 ~	MS/DS/H
Reduzir as complicações das DNT	Tratamento e monitorização adequados dos doentes a fim de retardar ou evitar o aparecimento de complicações, nomeadamente cegueira, doença coronária, insuficiência renal crónica e pé diabético amputações	Supervisionar a aplicação dos protocolos Equipar e fornecer materiais, reagentes e medicamentos aos hospitais para o diagnóstico e tratamento das complicações	I/2009; I/2010	MS/PNLDNT MS/DGF
Promover e apoiar a intervenção da comunidade	Formação e apoio na aquisição de materiais para as ONGs e líderes comunitários para actividades de informação/educação e apoio aos doentes.	Determinar áreas de intervenção Formar membros das ONGs Fornecer materiais educativos e outros	I/2008 IV/2008 IV/2008	MS/PNDNT MS/CNDS MS/CNDS
Promover a pesquisa	Organização da colecta de dados e realização de estudos visando a produção de informação estratégica.	Criar um registo nacional da diabetes	III/2008	MS/GEP

PLANO DE ACÇÃO 2008-2010
Domínio de intervenção: Tumores malignos

Objectivo específico	Estratégias	Actividades	Calendário	Custo	Responsável
Conhecer o impacto das DNT e principais factores de risco no nosso país	Realização de inquéritos para identificar e quantificar os factores de risco dos cancros do aparelho digestivo, ginecológico, mama e prostata.	Realizar novo inquérito para seguimento do impacto das intervenções de luta contra as DNT	IV/2010		MS/PLDNT

Promover a educação para a saúde	Intensificar as campanhas de informação dirigidas à população em geral, sobre os factores de risco e estilos de vida saudáveis	Capacitar o pessoal de saúde em IEC/DNT Elaborar e difundir mensagens educativas durante os atendimentos nas estruturas de saúde Elaborar e difundir programas educativos nos meios de comunicação social	III/2008 III/2008 I/2008	MS/CNDS MS/CNDS MS/CNDS
Reduzir a prevalência dos factores de risco na população	Prevenção e controlo do tabagismo, excesso de peso e “infecções sexualmente transmitidas”.	Implementar consultas de nutrição em todos os Centros de Saúde Implementar as leis de restrição de uso do tabaco em locais públicos Elaborar orientações técnicas sobre conteúdos programáticos a utilizar na formação de profissionais de saúde sobre a desabitação tabágica. Produzir orientações técnicas sobre aconselhamento e acompanhamento de fumadores em medicina geral Produzir orientações técnicas sobre os benefícios da actividade física. Apoiar a implementação das consultas IST	IV/2009 II/2008 I/2009 I/2009 III/2008 III/2008	MS/DS MS/ADM MS/PNLDNT MS/PNLDNT MS/PNLDNT MS /SR
Aumentar a proporção de DNT diagnosticadas precocemente e controladas	Aumento do número de cancro diagnosticados e tratados precocemente.	Apetrechar os Centros de Saúde para o rastreio e diagnóstico precoce dos câncros do aparelho digestivo, mama, colo do útero e próstata. Implementar protocolos de rastreio e diagnóstico precoce dos câncros do aparelho digestivo, mama, colo do útero e próstata a nível dos Centros de Saúde.	III-IV/2009 I/2009	
Capacitar médicos e enfermeiros no atendimento e seguimento dos doentes com DNT	Formação/capacitação de médicos e enfermeiros dos Hospitais Centrais, Hospitais Regionais e Centros de Saúde com base em protocolos elaborados	Formar médicos e enfermeiros com base nos protocolos elaborados Supervisionar a aplicação dos protocolos	II/2009 I/2010	MS/DS/H MS/PNLDNT
Promover e apoiar a intervenção da comunidade	Formação e apoio na aquisição de materiais para as ONGs e líderes comunitários para actividades de informação/educação e apoio aos doentes.	Determinar áreas de intervenção Formar membros das ONGs Fornecer materiais educativos e outros	III/2008 III/2009 III/2009	MS/PNDNT MS/CNDS MS/CNDS
Promover a pesquisa	Organização da colecta de dados e realização de estudos visando a produção de informação estratégica.	Criar um registo oncológico nacional	III/2008	MS/GEP

VIII. - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO**Quadro institucional**

O programa de luta contra as doenças não transmissíveis ficará sob a dependência da Direcção Geral da Saúde assim como todos os programas de Saúde Pública existentes.

Deverá ser gerido por um responsável a tempo inteiro que terá as funções de padronização, aconselhamento à Direcção Geral da Saúde relativamente à introdução de novas tecnologias, supervisão e avaliação da implementação de todas as actividades.

O nível operativo é representado pelos Postos Sanitários Centros de Saúde, Centros de Saúde Reprodutiva, Hospitais Regionais e Hospitais Centrais.

Para o normal funcionamento do programa deverão ser activamente procuradas todas as formas de integração e articulação com os outros programas de saúde pública, em particular o Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, o Programa Nacional de Nutrição, o Programa Nacional de luta contra a Sida, e o Centro Nacional de Desenvolvimento Sanitário que deverá também fazer o enquadramento das intervenções da sociedade civil organizada.

A gestão administrativa e financeira do programa deverá ser garantida por uma célula de gestão constituída por um técnico superior formado na área de administração/gestão/economia e outros técnicos de formação média.

Recursos e financiamento do plano

As intervenções propostas neste documento carecem de uma disponibilidade em recursos para facilitar a sua implementação.

Neste sentido é de realçar as necessidades que constituem condição sine qua non para a implementação do programa tais como a capacitação dos recursos humanos, o apetrechamento das estruturas, o fornecimento de medicamentos e a colaboração multisectorial.

Os Custos da implementação do Plano deverão ser estimados e actualizados anualmente, tendo em conta, entre outros aspectos, os resultados do inquérito sobre as doenças não transmissíveis, ora em curso, e a evolução da situação da saúde das populações no que se refere a essas mesmas patologias.

Plano de seguimento e avaliação

O acompanhamento da execução do programa, nos serviços prestadores de cuidados de saúde, será efectuado pelo PNL DNT

Supervisão regular: Guia de supervisão sobre a aplicação dos protocolos para diagnóstico e tratamento

Os resultados esperados são:

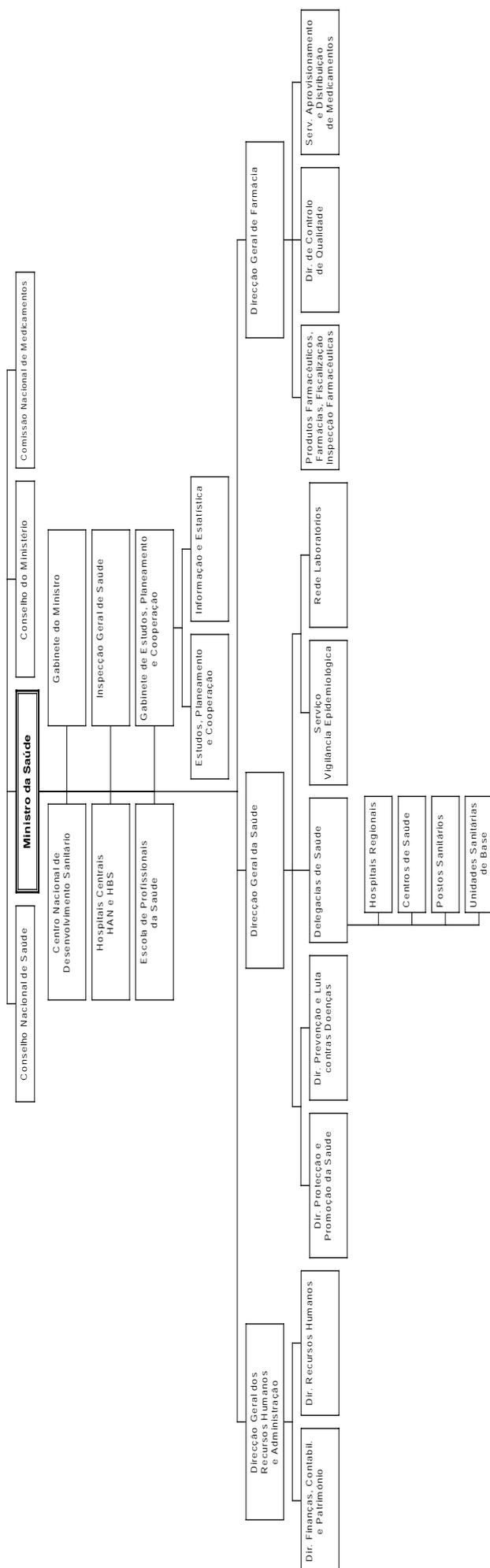
- Relatório do inquérito elaborado dados disponíveis I/2008
- Campanhas educativas realizadas
- Documentos de educação elaborados
- Pessoal de saúde capacitado na área de educação para a saúde (1 para cada centro de saúde)
- Protocolos elaborados e implementados
- Médicos e enfermeiros capacitados
- Estruturas de saúde equipadas
- Registos HTA, diabetes e oncológicos implementados

Os indicadores a serem colhidos e analisados anualmente são os seguintes:

- Prevalência de hipertensos identificados
- Proporção de hipertensos controlados
- Prevalência de doentes coronários identificados e tratados
- Prevalência de doentes com insuficiência cardíaca identificados
- Proporção de doentes internados por ICC
- Prevalência de doentes com AVC
- Prevalência de diabéticos diagnosticados
- Proporção de diabéticos controlados
- Proporção de diabéticos internados
- Proporção de diabéticos amputados
- Prevalência de dislipidemias identificadas e controladas
- Prevalência de tumores malignos identificados

ANEXO I

MINISTÉRIO DA SAÚDE



SIGLAS E ABREVIATURAS

- AVC – Acidente vascular Cerebral
 CNDS – Centro Nacional de Desenvolvimento Sanitário
 DCV – Doenças Cardiovasculares
 DGF – Direcção Geral da Farmácia
 DM – Diabetes Mellitus
 DNT – Doenças não transmissíveis
 DRH – Direcção Recursos Humanos
 FR – Factores de Risco
 GEPC – Gabinete de Estudo, Planeamento e Cooperação
 HTA – Hipertensão Arterial
 IDNT – Inquérito sobre factores de risco das Doenças Não Transmissíveis
 INE – Instituto Nacional de Estatística
 IST – Infecção sexualmente transmissível
 OMS – Organização Mundial da Saúde
 ONG – Organização Não Governamental
 PLDNT – Programa de Luta Doenças não Transmissíveis
 PND – Plano Nacional de Desenvolvimento
 SNS – Serviço Nacional de Saúde
 SPS – Serviço Público de Saúde
 TA – Tensão Arterial
 UCI – Unidade Cuidados Intensivos
- O Primeiro-Ministro, *José Maria Pereira Neves*

Resolução n.º 17/2008

de 14 de Abril

O desenvolvimento do turismo cabo-verdiano é uma matéria a que o Governo tem dado especial atenção, na medida em que é um instrumento eficaz na prossecução dos objectivos de desenvolvimento sustentado da economia nacional e potencia a reestruturação e diversificação das actividades produtivas, contribuindo para a fixação das populações, para o aumento da empregabilidade de mão-de-obra qualificada, para o seu bem-estar e qualidade de vida e, ao nível ambiental, preservando e valorizando o património natural e cultural.

O concelho da Ribeira Grande de Santiago apresenta características que indiciam ser este concelho um potencial foco de investimento e progresso, sendo, todavia, necessário que se crie um conjunto de mecanismos, por forma a permitir que o desenvolvimento se opere de forma cautelosa, salvaguardando todo o seu espólio ambiental, patrimonial e natural.

Neste contexto, reconhecendo a importância que o complexo turístico a ser implementado pelo Sr. Frederico Pereira Almeida, cidadão cabo-verdiano residente em Achada de Santo António, Cidade da Praia, reveste para o desenvolvimento urbanístico e económico do Concelho da Ribeira Grande de Santiago;

Considerando que a referida infra-estrutura hoteleira constituirá uma mais valia com uma forte componente de utilidade pública, nomeadamente no que concerne a preservação do meio ambiente;

Tendo em conta que, para a viabilização do projecto é necessária a concessão de uma parcela do domínio público marítimo,

Ao abrigo do disposto na alínea c) do número 3 do artigo 11º da Lei nº 44/VI/2004, de 12 de Julho, e

No uso da faculdade conferida pelo número 2 do artigo 260º da Constituição, o Governo aprova a seguinte resolução:

Artigo 1º

Atribuição

É atribuído ao Sr. Frederico Pereira Almeida, residente em Achada de Santo António, Cidade da Praia, ilha de Santiago, a concessão de uma parcela de terreno do domínio público marítimo situada na localidade contígua ao porto de Gouveia, no Concelho da Ribeira Grande de Santiago, medindo mil novecentos e cinquenta e dois metros quadrados, para a construção de um complexo turístico, sem prejuízo da obediência aos princípios e regras legais do licenciamento.

Artigo 2º

Prazo

A presente concessão tem a duração de cinquenta anos, podendo ser prorrogada.

Artigo 3º

Assinatura do contrato

Fica autorizado o Ministro de Estado e das Infra-estruturas, Transportes e Mar para, em nome do Estado de Cabo Verde, proceder à assinatura do contrato de concessão referido no artigo 1º da presente resolução e estabelecer a contrapartida financeira pela ocupação desse domínio.

Artigo 4º

Depósito

O original do contrato fica em depósito no Instituto Marítimo e Portuário.

Artigo 5º

Entrada em vigor

A presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Vista e aprovada em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, *José Maria Pereira Neves*

Resolução nº 18/2008

de 14 de Abril

Elevar a qualidade dos cuidados prestados às populações é uma das preocupações constantes do Governo de Cabo Verde visando garantir à população o melhor nível possível de bem-estar físico, mental e social, assegurando a protecção e a promoção da saúde, por um lado e a prevenção, o tratamento e a reabilitação da doença, por outro.

A melhoria da qualidade dos cuidados passa necessariamente pela continuação do investimento na construção e equipamento de infra-estruturas sanitárias mas também pela reabilitação e apetrechamento das unidades de saúde existentes.

Tendo em conta a necessidade urgente de execução de obras de reabilitação, remodelação das instalações hidro-sanitárias, substituição das redes de água quente e fria do Hospital Baptista de Sousa em São Vicente;

Ao abrigo do disposto na alínea b) do nº.2 do artigo 47º do Decreto-Lei nº 31/94, de 2 de Maio, bem como a alínea e) do artigo 4 do Decreto-Regulamentar nº 6/94, de 2 de Maio;

No uso da faculdade conferida pelo número 2 do artigo 260º da Constituição, o Governo aprova a seguinte resolução:

Artigo 1º

É dispensado o concurso público para as obras de reabilitação, remodelação das instalações hidrosanitárias, substituição das redes de água quente e fria do Hospital Baptista de Sousa em São Vicente.

Artigo 2º

A adjudicação das obras faz-se por concurso limitado, nos termos da Lei.

Artigo 3º

A presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Vista e aprovada em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves

Publique-se

O Primeiro-Ministro, *José Maria Pereira Neves*

Resolução nº 19/2008

de 14 de Abril

Prevenir e combater a criminalidade, nomeadamente o terrorismo, o tráfico de seres humanos e os crimes contra as crianças, o tráfico de droga, o tráfico de armas, a corrupção e a fraude é um dos objectivos do Governo e para o efeito é necessário dotar o país dos mecanismos e dos meios necessários para garantir maior eficácia neste domínio.

Neste quadro tem-se procurado dotar os serviços de polícia criminal de melhores meios para que com eficácia possam responder às exigentes competências lhes estão atribuídas e prosseguir as suas finalidades em matéria de prevenção da criminalidade, investigação criminal e coadjuvação das autoridades judiciais.

Os serviços da Polícia Judiciária na Cidade da Praia encontram-se instalados num edifício particular, com condições de funcionalidade totalmente desadequadas ao exercício das respectivas funções de polícia criminal, sendo urgente dotá-los de novas instalações, devidamente dimensionadas, com condições funcionais próprias para o exercício das funções e que obedeçam a padrões de segurança elevados.

Tendo em conta a necessidade urgente de execução de obras para instalação dos serviços da DIRECÇÃO CENTRAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DE CABO VERDE;

Ao abrigo do disposto na alínea b) do nº.2 do artigo 47 do Decreto-Lei nº. 31/94, de 2 de Maio, bem como da alínea e) do artigo 4 do Decreto Regulamentar nº. 6/94, de 2 de Maio;

No uso da faculdade conferida pelo número 2 do artigo 260º da Constituição, o Governo aprova a seguinte resolução:

Artigo 1º

É dispensado o concurso público para as obras de reabilitação, reconstrução e remodelação do Edifício da ex-sede da EMPA sito na Achada Grande Frente, cidade da Praia, onde ficarão as instalações dos serviços da Direcção Central da Polícia Judiciária de Cabo Verde.

Artigo 2º

A adjudicação das obras faz-se por concurso limitado, nos termos da Lei.

Artigo 3º

A presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Vista e aprovada em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves

Publique-se

O Primeiro-Ministro, *José Maria Pereira Neves*



BOLETIM OFICIAL

Registo legal, nº 2/2001, de 21 de Dezembro de 2001



Av. Amílcar Cabral/Calçada Diogo Gomes, cidade da Praia, República Cabo Verde.

C.P. 113 • Tel. (238) 612145, 4150 • Fax 61 42 09

Email: incv@gov.gov.cv

Site: www.incv.gov.cv

AVISO

Por ordem superior e para constar, comunica-se que não serão aceites quaisquer originais destinados ao Boletim Oficial desde que não tragam aposta a competente ordem de publicação, assinada e autenticada com selo branco.

Sendo possível, a Administração da Imprensa Nacional agradece o envio dos originais sob a forma de suporte electrónico (Disquete, CD, Zip, ou email).

Os prazos de reclamação de faltas do Boletim Oficial para o Concelho da Praia, demais concelhos e estrangeiro são, respectivamente, 10, 30 e 60 dias contados da sua publicação.

Toda a correspondência quer oficial, quer relativa a anúncios e à assinatura do Boletim Oficial deve ser enviada à Administração da Imprensa Nacional.

A inserção nos Boletins Oficiais depende da ordem de publicação neles aposta, competentemente assinada e autenticada com o selo branco, ou, na falta deste, com o carimbo a óleo dos serviços donde provenham.

Não serão publicados anúncios que não venham acompanhados da importância precisa para garantir o seu custo.

ASSINATURAS

Para o país:

	Ano	Semestre
I Série	8.386\$00	6.205\$00
II Série.....	5.770\$00	3.627\$00
III Série	4.731\$00	3.154\$00

Para países estrangeiros:

	Ano	Semestre
I Série	11.237\$00	8.721\$00
II Série.....	7.913\$00	6.265\$00
III Série	6.309\$00	4.731\$00

Os períodos de assinaturas contam-se por anos civis e seus semestres. Os números publicados antes de ser tomada a assinatura, são considerados venda avulsa.

AVULSO por cada página 15\$00

PREÇO DOS AVISOS E ANÚNCIOS

1 Página	8.386\$00
1/2 Página	4.193\$00
1/4 Página	1.677\$00

Quando o anúncio for exclusivamente de tabelas intercaladas no texto, será o respectivo espaço acrescentado de 50%.

PREÇO DESTES NÚMEROS — 630\$00